

Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual. Un análisis sociopolítico de la experiencia del Movimiento al Socialismo en el poder (2006-07)

Resumen y palabras clave del artículo: “Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual. Un análisis sociopolítico de la experiencia del Movimiento al Socialismo en el poder (2006-2007)”.

La idea y la práctica del cogobierno significó en Bolivia que los movimientos de matriz sindical dirigieran el país junto a –o en el lugar tradicional de– los partidos políticos, encarnando la concreción en el nivel estatal de la construcción contrahegemónica del campo popular. El artículo se propone dar cuenta de esta práctica histórica durante el primer año de gestión del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Se analiza, pues, la relación entre Movimientos Sociales y el gobierno enfocando la mirada en el Ministerio de Aguas y el Ministerio de Minería y Metalurgia, además de revisar el papel de las organizaciones sociales en la totalidad del entramado político del poder ejecutivo. Más en detalle, se repasa el sentido dado a la instancia de control social, a la relación entre dirigentes y núcleos de autoorganización, a la dinámica del instrumento político para finalmente desbrozar la diferencia entre cogobierno y administración estatal. La hipótesis central que subtiende el trabajo es que el MAS cumple el papel dirigente del proceso político, de modo que es en su accionar donde se deben encontrar las causas que potencien los niveles deliberativos y democráticos presentes en el país andino-amazónico.

Palabras clave: Bolivia, Evo Morales, Movimientos Sociales, Cogobierno, autoorganización.

1. Apreciación histórica acerca de la problemática del Cogobierno

“Pero eso no ocurre de la misma manera en Bolivia donde los sindicatos han existido siempre contra el Estado”.

René Zavaleta Mercado. *El Estado en América Latina*.

En el año 1952, la Revolución Nacional sentó las bases del Estado moderno en Bolivia y el entramado institucional que nació tuvo al cogobierno como una de sus piedras fundantes. Desde entonces, la interrelación entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el proletariado minero vencedor del ejército oficial dio origen a una de las principales ideas-fuerza que nutrieron la memoria colectiva del país andino-amazónico, la cual representó en su variante práctica que los movimientos de matriz sindical dirigieran el país junto a –o en el lugar tradicional de– los partidos políticos, encarnando la concreción en el nivel estatal de la construcción contrahegemónica del campo popular.

En concreto, el cogobierno consistió en la presencia de representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) en las instancias neurálgicas del poder ejecutivo. Pero este diseño institucional era efecto de una democracia de base sostenida en los socavones mineros, de una fuerza de masa encarnada en las estructuras sindicales y de una capacidad coercitiva de las milicias populares, obreras y campesinas. En este tiempo de convulsiones, la presidencia de Víctor Paz Estenssoro (1952-56) tuvo en la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal las

* Historiador. Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. CONICET y CLACSO.

acciones de gobierno que irían consolidando un nuevo bloque histórico destinado a durar, la escritura del “Libro de Abril” que afianzó el ideologema nacional-revolucionario en el país. Y así y todo, la dirección última de la apertura política fue encauzada por el MNR, burgués en lo ideológico y pequeño burgués en lo económico-social, frente a la debilidad de la dirección ideológica del movimiento minero, inhibiendo la creación de una sociedad postcapitalista como desenlace de la situación revolucionaria

A pesar de la modernización económica y política, el Estado ha continuado recibiendo el adjetivo de “aparente”, a causa de la tradicional gelatinosidad de su armazón institucional, de la imposibilidad de hacer converger en su accionar a una clase dirigente ausente, pero también debido a la singular potencia de sus mediaciones sindicales, desde 1952 la naciente COB pasó a representar un actor político decisivo sólo opacado por la dictadura militar de Barrientos (1964-69). Es esta misma “irreversibilidad de las masas” –como manifiesta Zavaleta– la que gestó un nuevo proceso de cogobierno. La asamblea popular fue caracterizada como la mayor experiencia estatal de la clase obrera en América Latina. Durante la presidencia de Torres (1970-71) un verdadero germen de poder dual reemplazó al poder legislativo nacional y convocó al sector trabajador de la nación a ejecutar un programa socialista, redimensionando los alcances del cogobierno instaurado en 1952. El proletariado poseía el sustento ideológico del que carecía años atrás, pero esta vez no contó con el control del aparato coercitivo para imponer su voluntad estatal, de modo que el golpe banzerista perpetuaría los regímenes de facto conservadores por casi diez años (Zavaleta, 1987).

En noviembre de 1979, la movilización de las masas trabajadoras persigue la instauración de un régimen democrático, conquista que logran plenamente para 1982. La llegada al sistema electoral permitió que la Unión Democrática Popular (UDP), constituida por los principales partidos de izquierda y apoyada por la COB, se hiciese del gobierno, encumbrando a Siles Zuazo en la presidencia de la República. Atravesando una galopante crisis económica, la UDP trató de reponer el cogobierno, que apenas fue respaldado por la central sindical, y tras una sucesión de fracasos (inflación incontrolable, precios inocuos de los minerales) la experiencia de la izquierda partidaria se precipitó anticipadamente, dejando abierto el camino a nuevas elites políticas que instalarían el ideario neoliberal. En definitiva, exceptuando los períodos militares y la era de “reformas estructurales” que surcó Bolivia desde 1985, el cogobierno ha estado de continuo presente –con diferentes grados de intensidad– en la historia contemporánea de Bolivia.

Ciertamente, desde mediados del siglo pasado las visiones sobre el sistema político del país se fundaron en el derecho popular a intervenir los procesos de deliberación y toma de decisiones a nivel nacional desde los niveles básicos de autoorganización colectiva. Ni propiamente moderna –aunque embebida en la tradición socialista– ni propiamente “liberal”, la práctica del cogobierno es un producto “mestizo” donde los sindicatos provocaron una fusión político-cultural que ahonda sus raíces en la persistente dimensión agraria y comunitaria. Si su práctica resulta clave, ello se debe a que subtiende una forma de afirmar el nombre de la democratización. En definitiva, tal como sostiene Luis Tapia: “Históricamente, la igualdad ha sido pensada como cogobierno” (Tapia, 2006). A la par, era una dinámica que hacía pareja con la cogestión, que implicaba la presencia de las organizaciones obreras en la administración macroeconómica. Los trabajadores y sus representantes formaban parte de todos los niveles de las empresas nacionalizadas, de cada ámbito público ligado a la minería. De este modo, la cogestión daba cuenta de una singular composición política de clase en la que el bastión de la estructura productiva se convertía en un elemento inmediatamente disruptivo, al identificar proceso de trabajo, organización sindical y administración colectiva.

Las condiciones estructurales en las que se desenvuelve la presidencia de Evo Morales distan de parecerse a las que abrigaron a esta “forma estatal” en sus sucesivas manifestaciones históricas y, sin embargo, su huella aparece como un índice problemático para dar cuenta de la actual relación entre organizaciones sociales y Estado; incluso esta misma diferencia lleva a la pregunta por su vitalidad actual. Aquellos papeles jugados por los representantes de clase en los sitios neurálgicos del poder político se nos aparecen como un índice problemático que señala la

posibilidad de escudriñar ejes históricos signados por una *longue durée*, al tiempo que se inscriben en un nuevo marco.

La práctica del cogobierno da cuenta en Bolivia de una escala –un “efecto estatal”– y una recurrencia histórica profundamente singular. En este sentido, nos convoca la necesidad de pensar el cogobierno al interior de una coyuntura en la que la acción colectiva tiende a verse comprometida de manera irreversible con los ribetes estatistas que embargan a las actuales gestiones del continente, abriendo a la problematización acerca de la aparición de la lucha dentro de los marcos institucionales. La idea de cogobierno pivotea entre la dimensión social y la política, circula entre las instancias de autoorganización y el gobierno nacional, pasa de la flexibilidad del movimiento social a la ordenación más rígida del partido político, mientras comunica todas estas dimensiones. En el plano normativo no sólo da cuenta de un nivel ampliamente desarrollado de “independencia de clase” o de autonomía política, también muestra las derivas hacia la subordinación, jerarquización o cooptación de las organizaciones por parte de los niveles macro-institucionales del Estado.

El ciclo que se abre parece desplegar una incógnita frente a los contenidos fuertemente antiestatistas que bien nutrieron el ciclo político con el alzamiento zapatista de mediados de la década del noventa (Barrett et al., 2005). El dilema no se asienta solamente en cómo los movimientos aparecen como poderes antiestatales, sino en qué medida logran componer la autonomía con formas de articulación de democracia directa nacional, y de qué manera desde el gobierno se potencian las formas de participación gestadas desde abajo, hasta qué punto es posible distinguir entre política de gobierno y acción de Estado. Hemos comprobado para América Latina la inusitada capacidad destituyente de una sociedad civil activada. Desde Buenos Aires a Oaxaca, los movimientos lograron interrumpir las mediaciones tradicionales del poder político, pero posiblemente no haya sido tan contundente su capacidad para crear una nueva institucionalidad. Así, la idea de cogobierno busca indagar sobre una suelo coyuntural hoy nítido para las prácticas de emancipación, lo que parece estar en juego es la problematización de una experiencia postleninista del Estado.

En apertura de perspectivas, lo que se presenta en el horizonte es la capacidad constituyente de los movimientos, la posibilidad de expandir el denso entramado organizativo que hasta aquí los vivificó, más aún si se tiene en cuenta que las organizaciones consideran al gobierno como el suyo. Y a su vez, se ponen a prueba las expectativas de materializar una vida mejor en el país más pobre de Sudamérica, sosteniendo una apropiación de excedentes en el Estado capaz de crear las condiciones para una mayor autonomía productiva. Al hacer esta afirmación no sólo apuntamos a señalar la evidencia de que se ha modificado la coyuntura, sino a señalar que el ensayo de múltiples movimientos sociales constituyendo la trama del gobierno nacional es una novedad, tal como recordaba García Linera, que no guarda similitudes geográficas ni históricas (García Linera, 2006).

Por tanto, en este trabajo intentamos indagar acerca de la dinámica del gobierno de Evo Morales en su relación con las organizaciones sociales. Dentro del vasto sistema de gobierno nos centramos en el poder ejecutivo, base del poder del MAS, instancia de gran centralidad para las organizaciones afines, ante todo porque el Poder Legislativo se encuentra fuertemente subordinado a las directivas que parten de la presidencia, tal como afirma un legislador del MAS paceño: “A veces tengo la impresión de que vienen los proyectos de la presidencia y estar acá para una sola cosa: Levantar la mano”. Y el Poder Judicial se muestra en todo contrario a los nuevos aires, por lo cual a mediados de 2007 el oficialismo se encontraba avanzando sobre él. Nos concentraremos en dos instancias privilegiadas, el Ministerio de Aguas y el Ministerio de Minería y Metalurgia, para luego reseñar los perfiles asociativos más amplios y los nuevos modelos de articulación que los movimientos establecen con el brazo ejecutivo del Estado. En este desarrollo, tratamos de identificar el accionar de una serie de sujetos políticos centrales del bloque de poder en ascenso: la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) –ciudad que “contiene a la nación”–, el Movimiento al Socialismo (MAS), el proletariado minero y el movimiento indígena.

El trabajo se inscribe en el marco de la sociología política, utiliza la imprescindible historia, y se funda en un seguimiento de la realidad local a través de periódicos de circulación nacional y de numerosas entrevistas realizadas a informantes claves¹. En el recorrido del trabajo de campo, una serie de preguntas fueron estructurando la investigación: ¿Cómo fue decidida la participación de los movimientos en el Estado? ¿Cuáles son y qué grado de institucionalización y peso político poseen las instancias de decisión y los canales de participación de las organizaciones sociales en el gobierno? ¿Es el “evismo” una proyección que busca de manera casi absoluta la autorepresentación y autonomía de las propias organizaciones subalternas o prevalecen las lógicas de subordinación y cooptación? ¿Acaso se presentan las tendencias clientelares y corporativas en la administración pública? ¿Cuáles son los proyectos que produjo el gobierno en el área próxima de los movimientos y qué dificultades se presentaron en su gestión?

Nos proponemos, pues, dar cuenta de la marcha concreta que el cogobierno presenta en el devenir del poder ejecutivo, puesto que será aquí donde pueda o no plasmarse, debido a que es en esas prácticas cotidianas donde día a día se prueba su materialidad. Vale decir que también hemos querido descentrar la atención de la Asamblea Constituyente, no sólo porque es una instancia lo suficientemente visitada, también abrigamos el anhelo de que prácticas “micropolíticas” iluminen igual sobre las tendencias no tan visibles pero igual de determinantes. Así, buscamos seguir un recorrido problemático, tratando de esquivar definiciones tajantes o valoraciones apresuradas, para mejor pegarnos a las encrucijadas de la política concreta que atraviesa hoy el pueblo boliviano. Procuramos, por último, sopesar los atisbos de una nueva institucionalidad en disonancia con el consolidado patrón neocolonial, con las dinámicas del discurso liberal-mercantil fuertemente asentado en los últimos años; es decir, los caminos posibles de la imagen clásica de la sociedad movilizadora frente a los intentos de abroquelamiento de la región en la que se concentra el espectro opositor: la media luna conformada por los departamentos del oriente.

1.1 El ciclo de expansión hegemónica (2000-2005)

Animada en su historicidad, la hora actual de la vida política boliviana es fruto del reciente ciclo de protesta que tiene a la “Guerra del Agua” (2000) y a la “Guerra del Gas” (2003) como puntos contenciosos de un movimiento societal que halló en el MAS la orientación de poder capaz de proyectar un diseño razonable de dirección de la sociedad (Tapia, 2002; Linera, 2004; Wallerstein, 1999). Las posibilidades del bloque contrahegemónico de expandirse y consolidarse responden a una inédita capacidad de creación política que alimentó –y a la vez se sostuvo– en una doble acumulación, electoral y autoorganizativa.

En primer lugar, la innovación política en el ciclo de expansión hegemónica es la capacidad de las organizaciones de articular acción destituyente y constituyente en un mismo movimiento. La “Guerra del Gas” es el ejemplo claro: deposición del presidente Sánchez de Lozada y consolidación de la exigencia de Gas y Asamblea Constituyente para Bolivia. El grado de movilización sostenido ha sido abrumador, no hubo fuerza capaz de oponerse a la multiplicidad de núcleos políticos activados, y fue el Estado el blanco de demandas y negociaciones, pero ante todo fue el depositario privilegiado del antagonismo (máxime si el gobierno pretendía exportar gas a Estados Unidos vía Chile). En los momentos de mayor convulsión, al ocuparse calles y carreteras, cuando los bloqueos y las protestas se agudizaban, los movimientos sociales lograron constituir una fuerza unitaria en torno a objetivos comunes. Todavía hoy, antes que una agenda de gobierno, el MAS posee una serie de mandatos a cumplir que han sido forjados por las agrupaciones en lucha.

En segundo lugar, frente a la lenta instalación de un nuevo ideologema que venía a asegurar que Bolivia debía entroncarse con el mundo globalizado, que el Estado era una burocracia

¹ Las citas que forman parte del escrito son producto de un seguimiento de la realidad boliviana a través de periódicos de circulación nacional, de entrevistas a informantes claves y otras fuentes primarias reunidas en el trabajo de campo. No hemos incorporado los nombres propios de los entrevistados debido a que en Bolivia existe una ley que impide a los funcionarios emitir juicios salvo que sea su función. En la práctica esto no sucede, pero dado que algunos preferían mantener el anonimato, optamos por mantener uno generalizado.

ineficiente, que la participación colectiva era un estorbo a la modernización mercantil y que los partidos políticos eran los únicos depositarios de la soberanía, se terminaron consolidando los núcleos de organización política-popular. Ellos expresan diferentes ejes históricos –las comunidades del altiplano festejaban el 21 de junio el año nuevo 5.515 mientras que los cocalleros se agruparon en el último tiempo–, formatos de acción colectiva disímiles –desde el bloqueo rotativo de caminos, propio de la tecnología comunitaria, hasta el recorrido de las rutas a dinamitazos como acostumbra los mineros–, marcos identitarios poco análogos –del clasismo al modernismo indigenista–, demandas variadas –desde las necesidades vecinales mínimas hasta la nacionalización de los hidrocarburos–. Y a la vez son núcleos que profesan un mismo rechazo al neoliberalismo que quiso disolverlos, la igual matriz del sindicalismo combativo de raíz comunitaria, los surca cierto aire nacional-popular, una memoria de derechos reivindicados e inexorablemente propios, una igual axiomática autoorganizativa. Este último ha sido el rasgo central de la acumulación colectiva, o su síntesis más saliente. En Bolivia no ha calado el proceso de descolectivización propiciado por el neoliberalismo, antes bien, las redes de reciprocidad e intercambio siempre mantuvieron su presencia, así como se ha intensificado la autonomía de las organizaciones.

Por último, dispuestas a democratizar la arena política y a contraponerse al recambio partidario de derecha que se gestó durante el período de pactismo neoliberal, en contra de la tesis del “indianismo puro” y del “obrerismo puro”, el instrumento político surge en 1995 como una mixtura, una llegada a la esfera política desde el terreno social: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, y las Seis Federaciones Coca Trópico del Chapare son los organismos matrices del MAS: “Aquí no hay relaciones por afinidad, nada de eso –sostiene un dirigente potosino–, sino que por naturaleza el MAS es dependiente de la CSUTCB y de otras organizaciones porque es hijo nacido y criado en el seno de estas organizaciones. Son hijos, y el hijo no puede gobernar a la madre o al padre”. El instrumento político encarnó una escalada que tuvo a la democracia electoral como un espacio de intervención y acumulación colectiva, orientación a la que también abonó el Movimiento Indígena Pachakuti conducido por “el malku” Felipe Quispe. El crecimiento del MAS ha sido vertiginoso, tras la Ley de Participación Popular de 1994, bien importante porque descentralizó la administración y las instancias de elección otorgando una importancia mayor a los poderes locales, pasó a ocupar la intendencia de muchos municipios: “Ganábamos los concejales y los alcaldes casi por mayoría absoluta. El MAS combina organización sindical, implantación territorial y organización política”. Luego, en las elecciones presidenciales de 2002, Evo Morales ocupó el segundo lugar a pocos votos del “Goni”, y consiguió 4 diputados, proyectándose como una fuerza de alcance nacional.

Para las elecciones de 2005, el partido contaba con el respaldo de las organizaciones que dieron luz al instrumento político y estableció una serie de alianzas electorales con sindicatos como la Confederación Nacional de Mediana y Pequeña Empresa (CONAMYPE), la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) y la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia (CNJRB), además de trabar lazos con partidos políticos como el Movimiento sin Miedo (MSM) y otras agrupaciones de izquierda de menor envergadura. Hubo sectores que no se acoplaron orgánicamente pero brindaron su beneplácito, la FEJUVE y la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto, por ejemplo, conformaron un “bloque social” que apoyó la candidatura de Evo Morales. El sistema de alianzas construido por el MAS se estableció fundamentalmente con aquellas organizaciones que compartían la misma matriz sindical, buscando hasta cierto punto mantener las afinidades ideológicas. Para algunos sectores se prometieron espacios de gestión a cambio de votos, otras agrupaciones no estaban tras los cargos pero sí de la capacidad de influencia en un futuro gobierno, y algunas eran antiguas compañeras de ruta del MAS.

Hay que mencionar que a la hora de la votación la capacidad interpelatoria del líder resultó central, tanto la figura de Evo Morales como también la de García Linera aglutinaron tras de sí los significantes que convocaron a la muchedumbre electoral. La elección de Álvaro García Linera

como candidato a vicepresidente permitió limar los ribetes más disruptivos del dirigente cocalero y aumentar la apelación a los sectores medios ciudadanos. No es un dato a despreciar la pobre campaña sustentada por el opositor Tuto Quiroga, quien procuró reciclar a antiguos dirigentes políticos ampliamente desprestigiados para la población. Y a pesar de que no esperaba alzarse con la victoria y mucho menos de un modo tan contundente, el MAS logró aglutinar tras de sí a los movimientos sociales, al espectro político de izquierda, y hacer del campo popular un vencedor, obteniendo un triunfo arrollador, con el 53.7 de los votos. Evo Morales expresó una voluntad popular generalizada que apunta a la posibilidad de llevar adelante un proceso de cambio frente a las elites neoliberales que gobernaron durante un cuarto de siglo el país, evidenciando una transversalidad étnica, clasista y regional, un universalismo propio de la fuerza que se hace del gobierno (Stefanoni y Do Alto, 2006). Esa encarnación de lo múltiple de la cultura y de lo social boliviano se representó en la triple asunción de Evo Morales durante el mes de enero de 2006: una primera “coronación” que guardó los preceptos tradicionalmente recíprocaros en el antiguo centro religioso de Tiwanaku, con miles de *malkus* formados militarmente y comunidades que celebraban a su presidente, la inmediatamente posterior asunción oficial en la que un acalorado discurso de Evo Morales bendijo la gesta continua de luchadores antiguos y actuales, y el festejo final en la plaza San Francisco de la ciudad de la Paz en el que fue recibido por el pueblo, la Bolivia plebeya.

2. El umbral que inicia un nuevo ciclo político: Evo Morales en el Gobierno

El arribo de Evo Morales a la presidencia constituye un umbral de pasaje que inaugura un nuevo ciclo político, en el que las tendencias cercanas continúan operando mientras mutan, en el que advienen de manera diferencial múltiples ejes de historicidad, donde los obstáculos y desafíos han de ser calibrados a partir de la ruptura que presenta una situación nueva. El ciclo político que emerge significa, en primer lugar, la llegada por primera vez de un presidente indígena al sitial mayor de preeminencia gubernamental, representante de una mayoría que ha pasado de la subordinación a la conducción nacional. El peso del hecho hace que Evo Morales haya sido designado presidente de los pueblos indígenas de América y que en Bolivia se haya desarrollado la cumbre mundial para festejar la Carta de Derechos Indígenas aprobada por la ONU en septiembre de 2007. Punto de condensación de un proceso cuyo origen reciente puede remontarse a la emergencia en el país del movimiento katarista de los años 70, y expresivo de una pujante reforma intelectual y moral en la que el movimiento originario vino a reclamar derechos negados a lo largo de su historia, soterrados por la larga duración del “colonialismo interno” instalado desde 1825 y apenas paliado por la Revolución Nacional. En segundo lugar, tal como afirmó Álvaro García Linera en su discurso inaugural frente al parlamento, se trata de la llegada de una nueva elite política a las instituciones clásicas.

Ni bien ocupado el sillón presidencial, Evo Morales bajó los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía, el suyo incluido, anunció que restringiría ampliamente las consultorías que tanto costaban al erario público y modificó la cúpula militar, en un acto de afirmación de la soberanía presidencial en el brazo coercitivo del Estado. Sus primeras medidas estuvieron orientadas a reafirmar el lugar conquistado por las urnas y a comenzar a ejecutar su programa de gobierno denominado Bolivia Digna, Soberana y Productiva². Una nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), rápidamente aprobada en el Congreso y luego promulgada, hizo que varias entidades que existían en anteriores administraciones desaparecieran, como es el caso del Ministerio de Asuntos Indígenas y Participación Popular, para dar paso a ministerios como el de

² El gobierno de Bolivia ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo, que aspira a “remover la desigualdad y le exclusión que oprime a la mayoría de la población boliviana, particularmente la de origen indígena y busca un nuevo Estado social comunitario, descolonizado y fundado en la multidiversidad”.

Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente, o el de Minería. A su vez, se crearon otros como el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales o el Ministerio de Aguas.

La designación de los mandos de poder que encararían la gestión del ejecutivo quiso evidenciar el papel que las organizaciones sociales vendrían a representar en él. Para el estratégico Ministerio de Hidrocarburos fue nombrado Andrés Solís Rada, un “viejo combatiente nacionalista” y crítico de las petroleras, en relaciones exteriores al indianista David Choqueuanca, en Justicia –contra las corporaciones de abogados– fue designada la ex empleada doméstica Casimira Rodríguez, bajo la constatación de que nadie más que ella podía saber lo que eran las injusticias, y el activista Hugo Salvatierra ocupó el Ministerio de Asuntos Campesinos. Otras carteras fueron asignadas con criterios corporativos: Trabajo quedó en manos del obrero fabril Alex Gálvez Mamani, y en el Ministerio de Aguas fue nombrado el ex líder de la FEJUVE del Alto Abel Mamani, mientras el Ministerio de Educación quedaba en manos del sociólogo aymara Félix Patzi, y el ex dirigente cocalero Felipe Cáceres iba a Defensa Social (a cargo de la lucha contra el narcotráfico). Pese al temor frente a una limpieza de los antiguos funcionarios públicos, como venía sucediendo ante cada recambio de autoridades, el MAS tendió a mantener a los empleados públicos de menor rango –cerca del 80 por ciento de la administración– en sus puestos de trabajo. Por un lado, arguyendo la ausencia de una intelectualidad orgánica apta para el desarrollo de tareas técnicas –en su momento Evo Morales expreso que “no hay gente capacitada en las organizaciones”–; por otro lado, la estrategia consistió en ocupar los puestos de perfil político bajo la idea de que las líneas directrices serían trazadas por la nueva elite en el gobierno, mientras que la gestión práctica pasaría sin mayores dificultades por los habituales funcionarios de Estado.

Ahora bien, una de las primeras medidas llevadas adelante por Evo Morales fue la elevación a la cámara legislativa de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la cual fue promulgada a los dos meses de estar en el poder. Tras ella, el simbólico día del trabajador decretó la nacionalización de los hidrocarburos, en medio de una espectacular puesta en escena, que incluyó la ocupación militar de las reservas más importantes y el anuncio de la medida desde el campo gasífero San Alberto, que pertenecía a la transnacional Petrobras. Medida en mucho significativa, en principio porque se inscribía así en la cadena de nacionalizaciones que acompañaron históricamente a los gobiernos progresistas de Bolivia. En segundo lugar, debido a que obtuvo un amplio aval de la población, siendo aceptada por cerca del 75 por ciento de los bolivianos, quizás el momento de mayor popularidad del mandatario. Por último, constituyó el puntapié inicial de la política económica neodesarrollista que despliega el gobierno del MAS, la constitución de un “capitalismo andino” –así lo llama el vicepresidente García Linera– capaz de hacer del Estado un motor de la economía, captando excedentes que luego se derramen en la pequeña y mediana industria, bajo un protocolo de desarrollo armónico proporcionado por la sobredeterminación cultural indígena. Estos dos hechos, a los que pueden sumárseles la mayor dignidad soberana frente a Estados Unidos y la reivindicación de la “hoja sagrada” de coca, resultaron bien importantes porque el gobierno de Evo Morales hasta aquí ha llevado adelante el programa que hizo las veces de articulación política de los movimientos durante los últimos años: la convocatoria a una asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos.

2.1 Los recursos hídricos: el nuevo Ministerio de Aguas

Bolivia ha visto evaporarse la riqueza de su ambiente natural de manera ininterrumpida aun antes de nacer, la dinámica neoliberal que se instaló a mediados de los 80 amenazó con recrear la imagen de un mal destino, donde empresas amparadas por un modelo legal absolutamente favorable a la inversión extranjera pasaron a convertir el suministro del agua en un servicio más que en un derecho, en una mercancía de libre mercado antes que en un bien público y a buscar la ganancia en vez de la satisfacción de una necesidad, razones en nada solidarias a la cosmovisión local que valora las fuentes hídricas como una donación de la madre tierra (Giansante et al., 2007). Al asumir Evo Morales, resultó claro que la problemática hídrica había constituido un punto neurálgico en el ciclo político que lo llevó al poder: “La emergencia de un conjunto de tomas de

posición y de propuestas de parte de las organizaciones campesinas, indígenas, vecinales, regantes -afirmaban desde el Ejecutivo-, ahora se plasma en la creación del Ministerio del Agua”. A su cabeza se nombró a Abel Mamani, quien siendo presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) alimentó la movilización alteña contra la ola privatizadora. A primera vista parecía que se apuntaba a tejer un vínculo orgánico con la estructura de movilización de la ciudad, pero el flujo de relaciones tendió a tomar otros carriles, puesto que Mamani fue inmediatamente declarado “persona no grata” por los nuevos referentes de la FEJUVE bajo la consideración de que no había consultado a las bases y que los estatutos de la organización barrial prohíben la participación en política privilegiando “el trabajo cívico”.

Ya para mediados de 2006 el tratamiento de los recursos acuíferos tenía un lugar bien definido en el Plan Nacional de Desarrollo, plasmado en las formas que adquirirían su marco institucional, sus metas, estrategias y programas. Un año después el plan de cuencas y el de saneamiento básico son los que se estuvieron implementando con más fuerza, y en menor medida los proyectos que procuran afianzar el sistema de riego nacional. Empero, la aplicación de las políticas públicas tiene un límite preciso señalado por una funcionaria del Ministerio: “Todo es casi financiamiento externo. Los europeos dicen que algo es bueno y se invierte allí. El mayor obstáculo es la plata. Se está gestionando conseguirla, hay carpetas que se juntan en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Para el plan de saneamiento de 500 millones que necesitamos hay 194 aproximadamente, por eso vamos despacio”. En definitiva, es más que evidente que un país que no cuenta con recursos abultados es proclive a depender, tal como primó durante los 90, de la consideración de las Organizaciones No Gubernamentales -que abundan en el país andino-amazónico- y del financiamiento de los organismos multilaterales de crédito.

Pese a estos impedimentos, el objetivo central del Ministerio ha sido confirmar la definitiva expulsión de Aguas del Illimani, distribuidora privada de agua de La Paz y El Alto, lo cual se ha alcanzado a principios de 2007. La filial de la transnacional Suez se comprobó que había incumplido múltiples ítems del contrato de servicio, pero su salida fue “amigable”, es decir, se produjo gracias a un acuerdo en el que aceptaba la necesidad de irse y recibía pocos capitales en compensación pero no era expropiada, debido a que “se fue tratando de llegar a un punto medio donde el gobierno de Bolivia no se perjudique ni la empresa, porque si nos perjudicábamos ambos iba a ser terrible, iba a afectar directamente a los servicios de agua”³. Se fundó entonces la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) que actualmente se encuentra en vistas a diseñar su futuro perfil general mediante una comisión compuesta por representantes de las municipalidades del Alto y La Paz, de ambas FEJUVES y del Ministerio de Aguas. Hasta tanto, ha desarrollado un plan quinquenal que tiene dos características, por un lado es un plan estratégico que proyecta llevar adelante infraestructuras de gran escala: redes primarias de agua potable, de alcantarillado o plantas de tratamiento del agua residual para la ciudad del Alto; por otro, es un conjunto de acciones de emergencia, ya que Aguas del Illimani había descuidado holgadamente la

³ Una de las metas anunciadas por Abel Mamani al asumir fue la de completar el proceso de expulsión de la proveedora de agua para la ciudad de la Paz y del Alto: Aguas del Illimani, filial de la transnacional Suez, de capitales franceses, una de las dos empresas más importantes del rubro a nivel global. Durante el año que duró la definitiva ruptura del vínculo -el decreto que ordenaba su terminación se firmó en enero de 2007- se sucedieron una serie de negociaciones y entredichos que fueron centrales en la dinámica del Ministerio. Un abuso del precio de las conexiones, cobros ilegales, falta de mantenimiento del alcantarillado, falta de cobertura de agua potable, inversiones que provenían de créditos otorgados por organismos multilaterales, como el Banco Mundial, pero conseguidos con ayuda del gobierno, fueron los argumentos que fundamentaron la medida. Los argumentos que apoyaban una “salida amigable” de Aguas del Illimani esgrimidos por el gobierno son que si así no fuese se perjudicaría la normal distribución del recurso en el último tiempo, que Bolivia perdería en un tribunal internacional como el CIADI -instancia que a mediados de 2007 el país abandonó- haciendo mucho más abultada la suma a abonar, que de este modo no se podrían producir futuros reclamos, que Bolivia se vería comprometida en el escenario internacional de créditos. Desde el Ministerio afirman que la empresa Suez comenzó solicitando una indemnización de 45 millones de dólares americanos, que “luego de 200 reuniones” terminaron siendo 11 millones de dólares, el cual constituyó el capital en un comienzo invertido pero que finalmente se transformaron en 5 millones y medio de dólares pagaderos en cuotas semestrales en un período de siete años -hasta el 2013- en bonos del Tesoro General de la Nación.

provisión, orientándose a un crecimiento vegetativo del universo de usuarios en base a la ampliación de las redes secundarias.

Los obstáculos que encuentran estos proyectos son relativamente claros, en principio se requiere para el próximo quinquenio una inversión de 40 millones de dólares. Otro es el relativo a las expectativas de la población respecto a la ansiada rebaja de tasas y tarifas, pero un estudio recientemente realizado por una consultora -aseguran desde EPSAS- concluye que habría que mantener los precios actuales. Hoy por hoy, el crédito de 5.5 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) -posible por el convenio de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que integran Venezuela, Cuba y Bolivia- es lo que permite estabilizar la nueva entidad. En el Alto, la cobertura del servicio del agua ronda el 70 por ciento, la mayor deficiencia se encuentra en la red de alcantarillado sanitario, que requiere una inversión no fácilmente recuperable. Evo Morales en junio de 2007 inauguró obras públicas para las zonas más necesitadas de la ciudad, una primera inversión fue hacia el distrito cinco, para infraestructura de alcantarillado, con recursos conseguidos por la misma EPSAS (200 mil dólares es la ganancia mensual), puesto que el objetivo es siempre la reinversión.

Al definir el término “empresa social”, los objetivos que la guían parecen ser más bien moderados, como ampliar los plazos de pagos para obtener la instalación del servicio o el reforzamiento de la red de información ambiental, y otro tanto puede decirse de la instancia de control social, a la que referencian como órgano de inspección anticorrupción y de presentación de iniciativas ante la dirección, un esquema blando siempre proclive a las injerencias corporativas y al nepotismo en la designación de cargos, como suele afirmarse que aconteció con la empresa estatizada en Cochabamba (Mondaca, 2006)⁴. Es que, sea como fuese, las perspectivas están un tanto alejadas del proyecto que el mismo Abel Mamani presentó cuando comandaba las protestas de 2005 buscando la expulsión de la compañía francesa, donde sería una asamblea articulada en todo el territorio alteño la que se situaría en el vértice superior del esquema organizativo de la nueva empresa y le prescribiría su rumbo.

La nueva gestión estatal trajo consigo una alteración de los componentes político-ideológicos que normaban el discurso acerca de los recursos hídricos. En el intento de reemplazar la “lógica empresarial” que primaba, y a tono con nuevas concepciones que a nivel mundial retoman la misma consigna de la lucha de Cochabamba en el año 2000 “el agua para la vida”, desde el gobierno se busca ampliar las connotaciones tradicionales que son parte constitutiva de comunidades indígenas y pueblos originarios. Así, el agua se concibe atravesada por lógicas culturales, como puede ser su factor vital en la construcción de los lazos sociales o su carácter armonizador de la relación del hombre con la naturaleza. En esta cosmovisión, los recursos hídricos son expresivos de la “reciprocidad”, cuya distribución debe basarse en los “principios de justicia, solidaridad, equidad, diversidad y sostenibilidad”. En definitiva, elementos que aparecen asociados a la gestación de un “Estado Social y Comunitario”. Igualmente, se pretende tener en cuenta un patrón de índole técnico-administrativa, donde las huellas de la eficiencia, la reinversión y la planificación posean un espacio, así como la ganancia que debe redituarse en su reproducción continua. Finalmente, aparece la necesidad de que tal concepción se plasme en un nuevo marco legal que venga a reemplazar al anterior de 1906, el ministro Abel Mamani afirmaba que “tenemos

⁴ Como parte de las políticas privatizadoras impulsadas por el Banco Mundial para América Latina, en 1999 el gobierno boliviano resuelve conceder a una empresa transnacional, Bechtel (Aguas del Tunari en su nombre local), la facultad de gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad de Cochabamba y alrededores. Esto fue considerado por la población como un atropello: el contrato fue casi clandestino, violentaba las formas tradicionales establecidas para la distribución del recurso; incrementaba las tarifas para hacer pesar sobre la población las inversiones de modernización del sistema, y expropiaba de hecho los pozos que alimentaban la red privada o comunitaria. El debate sobre la ola privatizadora se convierte en una insurrección popular como nunca antes se había visto en Cochabamba, de la cual surge la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida. En abril de 2000 la ciudad completa se levanta en contra de la privatización del agua y decide, en cabildo abierto, mantener tomada Cochabamba hasta que se eche abajo la ley. Se inicia un proceso de construcción política con la confluencia de sectores rurales y urbanos, indígenas y campesinos, trabajadores fabriles y desocupados; inaugurando el ciclo político contencioso que deriva en la presidencia de Evo Morales.

urgencias, es muy importante tener una nueva ley de aguas, que reconozca a todos los recursos hídricos como parte del dominio del Estado”.

Si enfocamos la participación popular y de las organizaciones en la recientemente creada estructura del Ministerio, existen dos instancias específicas cuyo lugar en el organigrama político administrativo las sitúa entre la cúspide ministerial y los viceministerios. El primero de ellos es el Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG) que tiene por finalidad específica elaborar un nuevo marco legal para la utilización de los recursos hídricos, una vez cumplida esta tarea se disolverá. Su fin, ya pautado en el decreto supremo 26.599 del 20 de abril de 2002, es abrir un espacio de diálogo y concertación entre el gobierno, del cual participan representantes de nueve Ministerios, y las organizaciones económicas y sociales -21 en total-, para adecuar el actual marco legal, institucional y técnico relacionado con la temática del agua, de manera que se ordene y regule la gestión de los recursos. La idea es estimular un proceso de consulta, de “recepción de propuestas” con miras a construir un preproyecto de la ley de aguas. El año 2006 realizaron diversas reuniones y talleres-seminarios en distintas áreas del país. En la última reunión, tras 32 borradores, se han consensado los diversos proyectos y presentado a la Asamblea Constituyente uno en el que se reivindica el agua como “un derecho humano y un bien social para el beneficio de todos los bolivianos” o se asegura que “la gestión del agua superficial y subterránea es competencia del Estado unitario, plurinacional, comunitario, previa consulta y aceptación de los pueblos indígenas, originarios y campesinos y las organizaciones sociales, siendo obligación del Estado normar, proteger y promover el uso sustentable del agua”.

En paralelo, el Ministerio de Aguas cuenta con un dispositivo específico y permanente de relación con las organizaciones sociales: el Consejo Técnico y Social -creado mediante la Ley LOPE-, “abierto a la participación de las organizaciones sociales, directamente vinculadas a la temática del agua, con el objetivo de definir, participar y opinar sobre las políticas públicas”. El representante oficial afirma: “Es el único ministerio que tiene esta instancia. O sea, que si no la aprovechamos para realmente hacerlo propio de los movimientos que han estado en las luchas, sería como un fracaso”. Durante el año 2006, ha ido elaborando sus estatutos y reglamentos pero se halla atado a una serie de dilemas: si son los técnicos o los referentes de las movimientos quienes lo rigen, cómo paliar la falta de participación de movimientos imbuidos de la temática como la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) o el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), o de otros que prefieren no participar, y también la ausencia en la discusión de temas sustantivos; todos elementos que llevan a que se encuentre, a mediados de 2007, tras un tiempo de prueba, en un período de readecuación. Es que desde el Ministerio resulta más que claro que las organizaciones sociales son actores muy significativos en el área, que en ellos reside una parte no menor de la legitimidad de las políticas públicas: “La ley de Agua Potable, ¿quiénes la van a sostener? Van a ser los usuarios con los cuales están relacionadas las diferentes empresas en Bolivia de agua potable, y si tú no participas, si tú no conversas, no los haces participar de una instancia como la del Consejo Técnico Social, quizás tu ley puede tener éxito pero también puede tener un fracaso, que dentro de un tiempo pueda caerse”.

Aunque se aprecie el intento por fomentar la participación, los actores sociales más importantes del sector no están a tono con la política que parte del poder ejecutivo. La nueva gestión de la FEJUVE encuentra fuertes disidencias de algunos distritos -cuatro de los nueve no fueron proclives a su designación- y serias dificultades para movilizar a sus bases, imposibilidad comprobada en los sendos intentos de protesta fallidos para destituir al prefecto local⁵. El poder revocatorio de la FEJUVE no encuentra su lugar en el nuevo contexto, lo que deriva en decisiones más bien individuales desligadas de las bases y en la búsqueda de canales institucionales de

⁵ La FEJUVE es una estructura de movilización que ha tenido un protagonismo de primer orden en las movilizaciones que en octubre de 2003 derrocaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y en el año 2005 al buscar la definitiva expulsión de Aguas del Illimani. Agrupa cerca de 500 asambleas de base distribuidas en los nueve distritos de la ciudad de El Alto -lindante a La Paz-, y produce reivindicaciones de fuerte carácter vecinalista que se combinan con demandas de escala nacional en los momentos álgidos de la acción colectiva. Actualmente es un actor de primer orden en la política urbano-territorial del país.

negociación. La falta de apoyo explícito al MAS y el carácter cívico hoy acentuado contribuyeron a que se vea relativamente relegada del entramado político nacional y del control de los recursos. La participación popular se mantiene en las reuniones vecinales, abocadas a las tareas locales en sintonía con un gobierno que perciben como suyo: “Estamos esperando porque el gobierno es nuestro” afirma una socióloga vecina de El Alto. Es que el Estado absorbió las demandas populares; no es un dato menor que sea la primera ciudad del país que tendrá un sistema de conexión de gas domiciliario, que se haya llevado adelante -con sus bemoles- la expulsión de Aguas del Illimani y que se destinen recursos -magros pero presentes- para la infraestructura pública de los distritos.

Paralelamente, resulta significativo que una organización que ha sido central en la apertura del ciclo contencioso boliviano, que instaló la problemática acerca del manejo de los recursos hídricos y aportó una renovación a las prácticas políticas, la Coordinadora del Agua y la Vida, se sitúe hoy en la neta oposición. Lo propio hace la Asociación Nacional de Regantes, que acusa de prácticas corruptas (malversación de las acciones de EPSAS) al ministro Mamani. En palabras del principal referente de “La Coordinadora”, Oscar Olivera, el “Ministerio no funciona de manera transparente y en movimiento porque es conducido unipersonalmente por Mamani”, y EPSAS está “peor que antes, hay partidocracia, un sindicato que se ocupa de sus intereses y la participación social no existe”. En fin, como corolario a estas apreciaciones, decidieron que en el transcurso de estos meses finales de 2007 tomarán el Ministerio de Aguas con el propósito de obtener la renuncia de Mamani.

2.2 Los recursos mineros: patrimonio del siglo XX hoy

La explotación minera estatal, que cifró la historia boliviana del siglo XX en tanto columna vertebral de la economía del país, halló su colapso luego del frustrado avance hacia la capital política que la “Marcha por la vida y la paz” emprendió en 1986; conducida por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivia (FSTMB). Advertida de un inminente baño de sangre, la dirigencia decidió no violentar el cerco militar que impedía su paso en Kalamarca y los trabajadores retornaron a sus distritos. Ese mismo día -29 de agosto- se promulgó el decreto supremo 21.377 que disponía la desestructuración de manera terminante de la otrora poderosa Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). El líder histórico del MNR, Víctor Paz Estenssoro, había asumido la presidencia tras el fracaso de la UDP proclamando que “Bolivia se nos muere”, y el intento de revivirla consistió en implementar una era de reformas neoliberales (Cajías, 2007).

Un nuevo régimen comenzaría a instalarse al cerrarse las más de 50 minas estatales, “relocalizando” al 70 por ciento de su fuerza de trabajo y convirtiendo en pueblos fantasmas a los distritos levantados en derredor del trabajo del subsuelo. Se abrieron paso antiguas tendencias de rango menor en el campo de la propiedad, acentuadas hasta tal punto que para el año 1997 el 94 por ciento de la producción se hallaba en manos privadas. Tal era el caso de la comúnmente llamada “minería mediana”, de los parajes desahuciados por COMIBOL que fueron entregados a capitales internacionales, e incluso del cooperativismo que pasó a absorber una cantidad abultada de los 47 mil trabajadores desempleados. El Estado, por su parte, terminaría por desprenderse a fines de 1999 de las tres explotaciones de posible futuro que aún conservaba, sin compradores fueron entregadas “al mejor postor” Colquiri, Huanuni y la fundición de Vinto. En aproximadamente 15 años el grueso de la base económica mineral había sido deteriorada hasta la práctica extinción (Soliz Rada, 2005)⁶.

Evo Morales, al rediseñar el poder ejecutivo nacional, tomó la decisión de reponer el Ministerio de Minería y Metalúrgica, una instancia política que supo ser central en los designios

⁶ Para 1980 la comercialización de minerales producidos por las empresas de COMIBOL representaba cerca del 60 por ciento de las exportaciones bolivianas, para fines de la década del noventa sólo el 5 por ciento. De igual modo, hasta 1980 existían unos 17.000 cooperativistas en Bolivia y en el año 2000 el sector se triplicó al contar con 47.538 socios y una cantidad de personas dependientes estimada en 251.951. A fines de 1991 se estimaba que existían 52 cooperativistas, 12 en la chica, 7 en la mediana y 5 en la estatal. El aporte de la minería al Producto Interno Bruto (PIB) ha decrecido desde 1990.

políticos del país pero que durante los tiempos neoliberales fue reducida a una Secretaría de Estado para luego encontrar un destino aún menor. Presidió la cartera Walter Villarroel, antiguo presidente de FENCOMIN y miembro de la cooperativa “La Salvadora” de Huanuni, una de las ventajas que negoció el sector a cambio del apoyo al MAS para el proyecto “Evo Presidente”. Las otras fueron la participación en la lista parlamentaria -hoy poseen tres diputados- y la entrega de las concesiones mineras cuyos contratos tengan observaciones. El abultado caudal electoral de los trabajadores por cuenta propia, por tanto, se inclinó en las elecciones hacia el actual mandatario, a quien rápidamente exigieron la promulgación de medidas que les beneficien en su faena extractiva, cargos en representaciones diplomáticas del extranjero y presentaron una lista de técnicos de FENCOMIN para integrar la plana estatal -anteponiendo que “no se trata de un cuoteo político ni sectorial”-. Ha sido la misma dislocación producida por la desaparición de la minería estatal en 1985 la que hizo crecer ampliamente al sector cooperativo, que lejos de sostener prácticas productivas igualitarias tendió a tejer relaciones laborales asimétricas e individuales, bajo pautas de funcionamiento cercanas a las de una pequeña empresa.

Desde un comienzo el ministro Villarroel procuró establecer una política consensuada con los diversos actores del sector, hecho esperable pero complejo, tónica análoga a la que sustentaba el primer mandatario, quien afirmaba ante la FSTMB la necesidad de “refundar COMIBOL y recuperar las minas para el pueblo” y ante los cooperativistas “una política de captación de 1.300 millones de dólares de inversión privada y apoyo financiero y técnico”. No resulta extraño que ante esta ambivalencia en el proyecto político-económico para el área la COB demandase naturalmente la destitución del ministro y lo propio hiciese la FENCOMIN, ya que una de sus corrientes buscaba un perfil técnico del que –decían- Villarroel carecía. Tampoco lo es, entonces, que durante ocho meses se hayan sostenido un total de 16 reuniones infructuosas con los principales actores de la minería, teniendo como eje las características que adquiriría la refundación de COMIBOL. Mientras los mineros asalariados demandaban una estatal minera productiva, los cooperativistas una que sea solamente administrativa, aunque ambos sabían de la falta de financiamiento y reivindicaban el control estatal sobre los yacimientos. Eusebio Gironda, asesor técnico de la presidencia, afirmó que “no aceptan nada, ni el uno ni el otro sector”.

2.3 Enfrentamiento de clase y transformación política

Los mineros asalariados de Huanuni detallan a los reciénvenidos que fue en los socavones del Cerro Posokoni donde una aguerrida asamblea dispuso la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en 1944. Sucede que el distrito orureño puede dar cuenta de un proceso ininterrumpido de creación política que no conoció altibajos aun en los momentos más férreos de la capitalización minera. Un alto funcionario del Ministerio de Minería sostiene que se debe reconocer a sus obreros puesto que “de no haber sido por ellos hubiera desaparecido la minería estatizada. Entonces Huanuni ha sido el último yacimiento que tenía COMIBOL trabajando y ha servido para reorganizar la minería”.

El cerro Posokoni, que contiene la reserva de estaño más importante de Bolivia, presentaba hasta hace poco un condensado de los actores económico-sociales que se desenvuelven en el área minera boliviana. La compañía inglesa Allies tomó a cargo la producción del cerro y de la fundición Vinto en 1999, ofertando casi 30 millones de dólares por ambas. Sin embargo, un mes después se supo que el Estado Boliviano sólo recibiría 14.7 millones dado que en equipos, materiales y estaño acumulado sólo tendría un valor de 15. Un año después comenzó sus faenas y prometió invertir 10 millones con el objetivo de introducir tecnología de punta. Sin embargo, desembolsó sólo dos y las condiciones de los trabajadores, en todos los aspectos, tendieron a empeorar. A principios de 2002 se supo que la empresa matriz en Londres, ahora denominada RBG, estaba en total bancarrota, y que había arrastrado en su crisis a sus posesiones locales. Ese año, después de algunas dubitaciones y principalmente por la movilización de los trabajadores, COMIBOL decidió intervenir Huanuni y ofertar inmediatamente Vinto, que fue adjudicada a la empresa boliviana COMSUR. Aunque COMIBOL señaló que el código minero aprobado en el 97 le impedía administrar Huanuni, los trabajadores y un amplio movimiento departamental, que

activó numerosas organizaciones sociales y cívicas orureñas, la obligó a quedarse en Huanuni y en la actualidad permanece como la única mina bajo administración directa de la COMIBOL.

Asimismo, el cuadro del cerro Posokoni se completaba con otros actores igual de importantes, que adquirieron una presencia cada vez mayor durante la década de los noventa. Luego de la relocalización, en Huanuni se formarían las cooperativas La Salvadora, compuesta por trabajadores provenientes de la mina situada a 100 kilómetros de Huanuni: Catavi Siglo XX, y luego Nueva Karazapato, Playa Verde y Relaveros Libres, está última dedicada a la aprovechamiento de los residuos de minerales echados al río. En total agrupaban a cerca de 4 mil trabajadores. La actividad de los *jukus* -tradicionalmente conocidos como “ladrones de mineral”, cuyo origen se remonta a tiempos coloniales- luego del decreto 21.060 se incrementó hasta niveles nunca alcanzados en todo el siglo XX. Los “lobos”, así son llamados por los obreros sindicalizados, se adentran por las galerías del cerro para lograr hacer una diferencia mínima, generalmente se inmiscuyen en la noche por entradas laterales, arrastrándose por cavidades mínimas a fin de burlar a la “policía sindical”. En 2000 COMIBOL informó que Huanuni era la mina más afectada por esta actividad, reportándole una pérdida de cerca de medio millón de dólares mensuales.

La convivencia de tantos sectores permite adivinar que la tensión en Huanuni no es nueva. En abril de 1997 los cooperativistas hicieron estallar miles de dinamitas para así tomar por la fuerza todo Posokoni, sólo un paro de 24 horas decidido por los asalariados y una serie de intermediaciones hicieron que los cooperativistas se contentasen con ampliar sus concesiones hacia los sectores de “Duncan” y “Harrison”, colindantes con los socavones de la COMIBOL, tornando aun más precaria y compleja las actividades de explotación del cerro⁷. Los cooperativistas, además, poseen cierta alianza con los *jukus*, en julio de 2001 por ejemplo, fueron apresados por la policía sindical una serie de lobos que habían robado material y sólo las mujeres de los trabajadores pudieron evitar una confrontación de considerables dimensiones frente a la acusación cooperativa de haber tratado con excesiva rudeza a quienes carecen de otra alternativa para llevar “el pan a sus hogares” (Cajías, 2007).

Es la misma tensión histórica alimentada por años en los que los antiguos trabajadores de COMIBOL acusaban de “pequeño burgueses” y los cooperativistas retrucaban “rojos subversivos” la que venía despuntando en los primeros meses del gobierno de Evo, alimentada por los sabrosos ingresos que reporta actualmente el estaño, gracias a la bonanza de los precios internacionales. En suma, quedó en nada la promesa de 2003, cuando los obreros de la empresa Huanuni y las cooperativas lucharon juntos por la reversión estatal de la mina, y sus líderes acordaron con un abrazo en el Paraninfo de la Universidad Técnica de Oruro pelear por su demanda y luego discutir el trabajo conjunto del estaño del Posokoni. “Todo eso ha sido desechado, ahora las posiciones divergentes traen discordia a la localidad y pueden derivar en consecuencias fatales. Sin embargo, las bases pueden cambiar este horizonte, mascan la coca juntos en el interior de la mina”, en palabras de Policarpio Calani, alcalde del poblado de Huanuni.

Efectivamente, la mañana del 5 de octubre de 2006 el distrito minero de Huanuni amaneció con una serie de dinamitazos que tronaron en las cercanías del socavón Santa Elena del cerro Posokoni. El sector cooperativo buscó ocupar las instalaciones estatales que acrecentarían sus parajes en Huanuni topándose con la resistencia de los asalariados de la FSTMB, y de esta suerte el pequeño poblado se transformó durante dos días en un campo de batalla. Evo Morales afirmó: “Mis peores días en ocho meses de gobierno han sido ayer y anteayer, viendo a nuestros hermanos mineros metiéndose bala y dinamita”; percibiendo a las claras las dimensiones que había adquirido el enfrentamiento: 16 mineros muertos, 61 heridos de gravedad, pérdidas materiales por 10 millones de dólares, además de sumir en un estado de conmoción a todo el poblado minero y no menos a la sociedad boliviana. Tal como señala Dunia Mokrani, se aparecía a la memoria sindical como un “enfrentamiento fratricida”, cuyo desquicio general hay que rastrearlo en los efectos que

⁷ El cerro Posokoni tiene la característica singular, en comparación con otros de la región, de poseer una estructura horizontal, lo que permite la existencia de diferentes explotaciones simultáneas sin que se entrecrucen fuertemente entre ellas. La presencia de cooperativas en el cerro es anterior a la crisis de la minería.

la era neoliberal produjo al disolver la cohesión política y productiva que caracterizaba al proletariado boliviano, apenas resguardada por los mil obreros de Huanuni que buscaron revertir ininterrumpidamente el proceso de capitalización desde el único yacimiento que quedaba en manos del Estado (Mokrani, 2006). Una continuidad que podría resaltarse nuevamente, lo que tenemos en el Sindicato de Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni es la perseverancia de la estructuración sindical, una fuente de recreación identitaria, el núcleo de la irradiación obrera que vemos en el proceso geopolítico de replicación organizacional.

Un atisbo de solución al conflicto comenzó con la propuesta de crear una empresa social totalmente estatal que recibiera inversión y contemplara la inmediata creación de 4.010 fuentes laborales para acoger a los cooperativistas locales bajo los alcances de la Ley General del Trabajo. Luego de realizar populosas asambleas, en las que varios señalaron que ya no quieren cargar la *k'epirina* (mochila de lona) porque prefieren percibir un salario, los cooperativistas de K'arazapato, Libres Relaveros y La Salvadora aceptaron la iniciativa del gobierno -ante la acusación de traidores de la matriz FENCOMIN-. El gobierno aseguró el anuncio de una Nueva Política Nacional Minero Metalúrgica para el 31 de octubre, día clave en el que durante el año 1952 se habían nacionalizado las minas pertenecientes a los “barones del estaño” Patiño, Aramayo y Rothschild, en el distrito minero de Catavi. Pero, sintomáticamente, una correlación tal del tiempo encontró un desenlace menos tajante, debido a que la proclama quedó postergada, alegando el poder ejecutivo falta de recursos y detalles a pulir pero teniendo de fondo la oposición de los cooperativistas, cuyo líder potosino -Filomeno Qaqa Flores- afirmó en medio de una movilización que la organización instruyó que en “cada mina, en cada socavón, un minero esté armado”. Contribuyó también a ello la visita al Ministerio de funcionarios de la embajada de Suiza, quienes expresaron su preocupación por el anuncio de estatización de los centros mineros que fueron del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que estaban en manos de capitales de aquel país, o la de los representantes de la minería mediana, inquietos por la decisión de revertir concesiones que, aseguraron, dañarían la posibilidad de sostener proyectos grandes, como San Cristóbal y San Bartolomé, impulsados por capitales estadounidenses. Así, pues, se anunció el más modesto pero no poco importante Decreto Supremo 28.901 que determinó que todo el cerro Posokoni esté bajo dirección y administración de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), tornando cierta la terminante expresión del nuevo ministro Guillermo Dalence: “No más cooperativas en Huanuni”.

La alianza que unía a la minería cooperativista con el gobierno de Evo se disolvió abruptamente, mostrando claramente los límites corporativistas que orientaron la construcción del entramado político y electoral del MAS, disolución que no fue ruptura. Como era de esperar, emergió en contraparte una alianza estratégica con el sector asalariado de Huanuni, con la FSTMB. Pero, por sobre todas las cosas, el conflicto puso en primer plano la evidencia de que aun en el mismo gobierno de Evo Morales y a pesar de un grado mayor de receptividad, es en la resistencia de los trabajadores del subsuelo donde hay que encontrar las causas que posibilitaron refundar la actividad minera para que sea futuro patrimonio de todos los bolivianos. Comprobemos que son los núcleos políticos movilizados los que fuerzan las medidas más progresistas, si así no fuese las cosas tendrían a seguir “como de costumbre”; esto es, en cercanía con los patrones de funcionamiento inmediatamente recientes. De modo que la capacidad constituyente y el poder de presión de los movimientos es un factor de primer orden a la hora de tornar radical la política del gobierno.

Desde entonces, la agenda minera ha entrado en la sintonía de nacionalizaciones que busca armonizar el gobierno del MAS. Arribó a las altas esferas ministeriales una capa intelectual de arraigo nacionalista, con trayectoria en el determinante movimiento clasista de antaño. El actual ministro, Alberto Echazú, de reconocida militancia maoísta, afirma que el plan de acción estatal consiste en reconstruir la COMIBOL -cuyo actual presidente era el representante de la FSTMB en el directorio- sobre la base estratégica de Huanuni y Vinto -recientemente nacionalizada- yendo hacia la explotación de nuevos parajes y antiguos residuos aún productivos, sosteniendo finalmente una presencia sustantiva en todos los procesos económicos: extracción, industrialización y comercialización (actualmente en manos de empresas privadas que hacen una

gran diferencia monetaria). Un trayecto que aguarda consolidarse con un nuevo código minero, cuyo adelanto fue la promulgación el 1 de mayo de 2007 de un decreto que declaraba a todo el territorio boliviano reserva fiscal minera. Frente al sector cooperativista se trata de proveerlo de material técnico o de una suba leve del Impuesto Complementario Minero, a fin de no enemistarse con una organización que aglutina 60 mil trabajadores y en las explotaciones de gran envergadura, como el yacimiento de hierro Mutún otorgado a la empresa india Jindal, se busca que prosigan grandes capitales con un margen de ganancias en provecho del Estado mayor que el corriente.

Igualmente, la articulación de los actores que pugnan por un proyecto común no se encuentra exenta de tensiones: a mediados de julio, la FTSMB fue reprimida y desalojada de la ruta a la fuerza; entre otras cosas, demandaba un nivel más amplio de autogestión en Huanuni, en parte conseguido al formarse una “comisión tripartita entre COMIBOL-trabajadores mineros-Ministerio de Minería [para contemplar] el pedido de participación, control social y fiscalización de los trabajadores” que contribuyera al diseño de la nueva Ley de Empresas Estatales. En estos casi dos años de gobierno, ha vuelto a ser la protesta la que ha posibilitado que un dirigente de Huanuni afirme: “Nosotros tenemos una herramienta política, que es la relación con el poder a través del control obrero”.

2.4 Control social y cogestión

La huella de la cogestión es fácilmente reconocible en las instancias de control social que se proyectan en cada una de las instancias institucionales que presenta el Estado, desde las empresas públicas hasta los ministerios tienen a la orden del día la tarea de darse una instancia de control social, evocación constante que es tan fuerte como débil su perfil concreto. La instancia de control social está asociada a la aplicación de la Ley de Participación Popular de 1994, la cual buscaba descentralizar la política al crear 250 (que terminaron siendo 311) municipios. En los diversos poderes locales debían formarse Comités de Vigilancia y plurales mecanismos de control social, que vendrían a establecer un seguimiento a la dirigencia de los municipios al tiempo que se constituían en espacios de encuentro ciudadano, muy alentados por el financiamiento de los organismos internacionales a tono con la dinámica focopolítica que acompañó al régimen neoliberal⁸. Una de las funciones reales de la descentralización político administrativa era quebrar los patrones unitarios de acción política que tanto habían arreciado en Bolivia, abriendo el camino a los mecanismos partidarios y a la expansión de las redes clientelares; sin embargo, las comunidades comenzaron a ganar las elecciones. Es en esta instancia donde se puede apreciar la capacidad de adaptación de las matrices de participación del movimiento indígena, que con el tiempo lograron volver a su favor esos nuevos atributos del poder local, accediendo a sus espacios de dirección, resignificando “desde abajo” lo creado “desde arriba” y sin ser subordinados a la práctica discursiva del régimen liberal, haciendo prevalecer las ya antiguas y establecidas Asambleas Municipales, Cabildos Municipales, o las Reuniones Generales de la Marka, entre otras instancias de democracia directa.

El paraguas legal de los mecanismos de control social ya se encuentra establecido en Bolivia, pero es en cada aplicación concreta donde se debe probar su fertilidad. Mencionemos que en torno al balance de las experiencias anteriores suele subrayarse que los Comités de Vigilancia se encontraron con una serie de obstáculos: si iban hacia la recolección de demandas o monitoreaban las cuentas municipales, la escasez de recursos, la partidización a la que están sometidos, la mitificación que termina convirtiéndolo en un imprescindible comodín en diversas normas de contenido igualmente diverso. Al mismo tiempo, se señala el grado de efectividad que posee en el nivel micro a pesar de que aún no cuenta con una escala nacional (Ayo, 2004).

Con todo, lo que resulta más significativo es la ambivalencia que existe en los modos de pensar la esfera del control social, la cual pivotea entre una vertiente de discursividad neoliberal y otra

⁸ Por focopolítica entendemos la puesta en marcha de procesos de empoderamiento de las redes sociales y los núcleos de agregación colectiva pero bajo un protocolo marcado por el discurso mercantil que tiene como fin último el control social. Los organismos multilaterales de crédito avalaron en los 90 estos mecanismos de contención para Latinoamérica.

marcada por el clasismo. En el Ministerio de Aguas tienden a definir al control social como una herramienta de fiscalización que los aires de la época traen consigo, sin darle demasiada importancia política, diferente es la práctica del movimiento minero, quienes también han logrado apropiarse creativamente de la normativa vigente, haciendo del control social una instancia de injerencia en el destino de la empresa. En Huanuni, el control social significa que los obreros tienen derecho a conocer toda la información que forma parte de la administración de la empresa, este manejo les permite múltiples posibilidades: desde calibrar los aumentos salariales posibles, pasando por la apropiación del derecho a saber cada paso de la empresa, hasta la proyección de las líneas posibles de trabajo, así es como la instancia de control social tiende a confundirse con control obrero. En suma, el control social es el nombre actual de la cogestión, que al no tener un formato probado marcha desde la ineficacia, pasando por la participación cívica simulada propiciada en épocas pasadas, hasta el liso y llano control obrero. Así lo afirma un diputado de la CSUTCB: “Los movimientos sociales mucho tiempo han impulsado el control social a un Estado con características neoliberales, pero cuando llegamos al Estado no puede seguir siendo control social, tenemos que ser responsables de la gestión pública. No sólo decir esto está mal esto está bien, sino planificar la política pública estatal, evaluar el nivel de ejecución. Además, construir la visión de Estado que tenemos en el mediano y en el largo plazo”.

3. Articulaciones políticas en la dinámica ampliada del poder ejecutivo

“Si usted quiere ser disputado tiene que ir a hacer campaña para que voten por usted, y a todas las clases va a ir a decir: ‘Yo voy a hacer esto, y quiero hacer esto, esto y esto; y quiero que voten por mi’. En la federación de mineros la democracia era al revés, las bases decían yo quiero que mi dirigente minero sea él. Y muchas veces ese decía ‘Yo no puedo compañeros, por favor. No me tomen en cuenta’. Tiene que ser. Entonces aquí la democracia era que la base era la propietaria de las decisiones y el dirigente se convertía en el portavoz de ellos. Esta democracia es la que se debería instituir en todas partes”. Edgar Ramirez Santiesteban, ex Secretario General de la Central Obrera de Bolivia, actual Director de los Archivos Históricos de la COMIBOL.

El umbral de pasaje que instauró el arribo del MAS al poder crea un panorama radicalmente diferente al que venía ofreciéndose cuando el gobierno era el claro antagonista que aglutinaba la acción conjunta de todos los movimientos sociales, brindándole una coyuntura modificada al ciclo contrahegemónico que despuntó en el año 2000. La actualidad boliviana se torna difícil de comprender al interior de la polarización entre el papel activo de los movimientos sociales y el devenir cosificador del Estado, en cambio ella nos ofrece un proceso que permite dar cuenta del nivel de autonomía en el manejo de lo público, no necesariamente subsumido bajo las lógicas clásicas de un Estado que, claro está, opera en última instancia como garante de la reproducción de las relaciones sociales.

Este prisma para calibrar las modificaciones quisiera alejarse tanto de las visiones institucionalistas que ven en el entramado estatal el lugar sobre el cual se conduce toda política así como de las contrarias que la sitúan en la dimensión autónoma de lo social por fuera de todo marco de articulación, aún presas de una persecución estadocéntrica en la que todo rasgo institucional seguiría denotando la reproducción de una máquina fría. En este sentido, es hora de suspender la mirada romántica que sitúa la política indefectiblemente en los movimientos, o en la aún etérea multitud, y una valoración análoga pero invirtiendo los polos, como puede desprenderse

de la sorprendente denuncia por parte de voceros estatales de que algunas movilizaciones esconden ahora “motivos políticos”. En suma, se trata de comprender lo que sucede en lo que vemos como la apertura de un nuevo ciclo que inaugura época, redefiniendo el lugar de los actores, para mejor valorar el papel cambiante que puede demostrar la figura del cogobierno. Una de las preguntas que habilita la nueva situación es cómo crear una nueva institucionalidad compuesta por los núcleos políticos de participación popular, es decir, un movimiento societal que opera e incide sobre la forma estatal disolviendo sus funciones al crear nuevas instancias de gobierno comunal. De hecho, el pensar en el cogobierno sólo tiene sentido a la luz del nuevo panorama que presenta la vida histórica del país.

Sucede que los dos últimos años han modificado las condiciones, los objetivos, las dinámicas internas, y demás dimensiones sobre las que venían desplegándose partidos políticos y movimientos sociales, cada uno de los sujetos políticos protagonistas del pasado reciente. Se torna claro que el instrumento político pasó a ocupar el sistema de gobierno, con lo cual su rol de opositor se vio trasmutado por otro en el que debe ejercer funciones concretas de ejecución, en el que Evo ya no encarna a un dirigente representativo de un sector -el cocallero- y a un candidato que busca interpelar a muchos sino al presidente de todos los bolivianos. Algo análogo puede postularse para las organizaciones sociales, en cuanto a sus repertorios de acción colectiva, aunque la protesta continúa siendo llave para la obtención de recursos, no suelen pulular desmedidamente los formatos disruptivos sino que tienden a privilegiar el trabajo “para adentro”, como sucede en la FEJUVE, cuyas bases están dedicadas -afirma una socióloga alteña- a realizar el “trabajo de organización de la infraestructura territorial que habían descuidado hasta aquí”. En su extremo, de seguro que la movilización a escala nacional ya no se hará en contra de un mandatario en todo ajeno sino frente a la elite económica de la “media luna” o en defensa de la Asamblea Constituyente, pero de hecho no veremos desplegarse esa capacidad pasmosa de revocatoria que supieron detentar. La gestión actual de la FEJUVE, por ejemplo, no consigue recursos oponiéndose al MAS, mientras que la COR ha leído que llegaron los tiempos de la conciliación institucional, una que no es vista como sumisión. El abanico de demandas también se muestra en todo diferente, las organizaciones ganaron una legitimidad amparada por las urnas, y esperan una eficacia propia de lo que les pertenece; sus peticiones tienden a desenvolverse en el ámbito más particular y a dejarse en manos del gobierno las políticas de alcance nacional, aquellas genéricas como lo fue la “nacionalización” en octubre de 2003. Vemos entonces que los elementos tradicionales que distinguían el accionar del bloque contrahegemónico se transmutan, y ello debido a que estamos ante una nueva etapa, nuestra idea es que el umbral de pasaje ha abierto una nueva temporalidad, con otros problemas centrales, expectativas y protocolos de valoración.

3.1 Instancias de coordinación con los movimientos en el gobierno

A lo largo de este año y medio de gobierno masista una serie de ministros surgieron orgánicamente de los movimientos, y se toparon con no pocas dificultades en la gestión, Abel Mamani fue prontamente desconocido por la FEJUVE como tuvimos oportunidad de ver, Walter Villarroel además de no encontrar reconocimiento en su propio movimiento dividido -FENCOMIN-, debió abandonar más temprano que tarde la cartera a causa de su parcialización en el conflicto de Hunauni; a su vez, recayó sobre Casimira Rodríguez, ex dirigente del sindicato de empleadas domésticas, la acusación de falta de idoneidad para el cargo por lo cual se vio en la obligación de dejar el Ministerio de Justicia. Los representantes de las organizaciones sociales continúan en los viceministerios de Defensa Social, Microempresa, de la Coca. A principios de 2007 una reorganización del poder ejecutivo redundó en la salida de Félix Patzi, sociólogo indigenista que ocupaba el Ministerio de Educación. Las figuras del cogobierno aparecen a partir de trayectorias no lineales, en medio de una heterogeneidad de funcionarios de diverso origen. Con todo, se ha formado un bloque homogéneo de gestión política, tal como afirma una funcionaria del poder ejecutivo: “Las organizaciones matrices, las federaciones, las coordinadoras de barrio, lo que ha sido el sostén para que el Evo llegara al poder... Todas las cabezas de esas organizaciones ahora son parte del gobierno, diputados, ministros, asambleístas...”. Justamente, los dirigentes de

las organizaciones sociales han pasado a ocupar los puestos estatales, dando cuenta de la consolidación de una nueva elite política. Si en la práctica podemos hablar de que la figura del cogobierno se presenta cristalina es porque esa elite es en gran parte fruto de años de militancia en las organizaciones de base, un rasgo que se aprecia en el mismo poder legislativo, donde la CSUTCB posee cerca de un 30 por ciento de la bancada del MAS en diputados, que cuenta con mayoría propia.

Ahora bien, la interacción de un mismo bloque de gestión puede impedir que se desarrollen de manera más autónoma cada una de las instancias participativas de la política popular, ya que comienza a mezclarse partido y gobierno, organización social y gobierno, en esa línea transversal que ahora genera una divisoria entre los que son funcionarios y aquellos que quedan en el llano de los movimientos. Bien representativo resulta que Evo Morales sea a la vez presidente de la República, de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), del MAS, y de los sindicatos del trópico de Cochabamba, funciones polivalentes que también cumplen otros dirigentes de peso, denotando la existencia de un bloque que corta todas las organizaciones en relación a una jerarquización ahora consolidada. De hecho, no son pocos los que comentan negativamente que se ha “descabezado a las agrupaciones”, quedando huérfanas de dirigentes con trayectoria y experiencia política. Sin embargo, aunque tienden a concordar en líneas de acción genéricas y respetan las más de las veces la cadena de mandos, sería un exceso decir que esta cúpula es unívoca, puesto que no son los mismos los proyectos, las visiones del país, y los requerimientos que elaboran cada uno de los funcionarios, elemento que no se manifestaba al interior de la estructura piramidal de la COB.

En la rediagramación del poder ejecutivo se han intentado alumbrar nuevas articulaciones que cuenten con la participación de las organizaciones. Uno de ellos es el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, reemplazando el anterior de Conflictos. El Viceministerio se divide en tres unidades centrales. Una primera es la de gestión a la demanda social, que se encarga de recibir en audiencia a los sectores sociales, adoptan sus reclamos y luego los canalizan, enviándolos a las dependencias oficiales competentes, tras ello realizan un seguimiento que finaliza cuando el área referida envía una carta a la organización, con copia al viceministerio, explicando de qué forma se está avanzando. Durante el año 2006, el 30 por ciento de las demandas ha llegado a buen puerto, lo cual –sostienen– es un porcentaje relativamente bajo. Otra unidad es la de seguimiento y análisis, que diariamente elabora matrices de conflictividad, un avistaje sobre todos los conflictos, alertando sobre su existencia, caracterizándolos, proponiendo diferentes soluciones, etcétera.

Paralelamente, cuenta con un ámbito de fortalecimiento a las organizaciones sociales que está a cargo de la realización de las “mesas de dialogo”, a las cuales se las convoca, previo listado de temas a tratar, y se llama a los distintos sectores del poder ejecutivo responsables de la temática. A lo largo de estos casi dos años de gestión se han realizado múltiples encuentros, por ejemplo con la Asamblea de Pueblos Guaraníes (AGP), quienes se han reunido con representantes del Ministerio de la Microempresa, de Tierras, de Aguas, de Hidrocarburos, de Minería... El Viceministerio de Coordinación con Los Movimientos Sociales hace las veces de moderador, de modo tal de que se escuchen las ideas: “Una cosa de ida y vuelta. Hay cosas ricas, porque la APG no ha venido con su demanda sino con su propuesta”. Aun esta iniciativa de fortalecimiento de las organizaciones, que es la más novedosa del viceministerio, no supone en sí la participación de las agrupaciones, sino que es un espacio en el cual son escuchadas, como acontece en la formulación de la Ley de Aguas articulada por la CONIAG, lo cual se diferencia a las claras de las anteriores gestiones, pero conserva la separación que las concibe como “proveedoras”. En consecuencia, se reedita la tradicional subordinación frente a la institución tutelar, mientras que el cogobierno histórico tenía de singular la intervención directa en la ejecución. Es que a veces en los pasillos del Palacio de Gobierno se escucha una distancia ideológicamente especular, para unos hay demasiadas demandas y para otros demasiados funcionarios. Con todo, a pesar de buscar canales de articulación con las organizaciones, finalmente el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales es un organismo que se ve envuelto en un destino de control y seguimiento

del “carnaval de protestas” –en palabras de Evo– más que en uno de neta participación, todavía atado a los moldes tradicionales enquistados en el discurrir estatal que marcan las fronteras de lo posible, incluso subsumidos por el carácter centralista propio del poder ejecutivo.

En torno a la articulación del cúmulo de movimientos que caracterizan a la sociedad boliviana han existido a lo largo del tiempo diferentes instancias, una de ellas fue el Pacto de Unidad, una composición bien propia de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, que se ha desarrollado en 2003 y hoy en día además de las organizaciones matrices del MAS incluye, entre otras, a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y al Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ). Luego de un período de relativo estancamiento fue resucitado con fuerza al momento al comenzar la Asamblea Constituyente, aunque a principios de julio de 2007 mostraba ciertas rispideces internas a la luz de los vaivenes que transitaba la convención. En su momento, el Estado Mayor del Pueblo ejerció también como instancia articuladora de las organizaciones, pero fue puesto rápidamente en entredicho por la COB, la cual advirtió que ella era por peso histórico la depositaria de una caracterización de esa naturaleza. Tras la deriva más bien errante de estas articulaciones, que no han llegado a dotarse de una organicidad concreta, a principios de 2007 se ha creado la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), que vino a officiar de estructura continua de los dos encuentros que Evo Morales tuvo a mediados de 2006 y en enero de 2007 con los movimientos sociales para evaluar su gobierno.

La CONALCAM se define como una instancia nacional de encuentro político entre los representantes de los Movimientos Sociales, de la Sociedad Civil, del poder ejecutivo, del poder legislativo y de la convención constituyente y se crea para constituirse, así lo afirman sus mismos documentos oficiales, en la “dirección política revolucionaria de la Revolución Democrática y Cultural”, analizando la situación general del país, delineando acciones y estrategias de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, aunque se presenta como una articulación política situada por encima de todos los poderes, incluyendo el sistema de gobierno y la asamblea, y que algunos diputados aseguran que “delinea un poco el aspecto político actualmente, sus líneas matrices”, en la práctica está dominada por la figura de Evo Morales, sus funciones son de fiscalización más que de dirección y de discusión democrática. En concreto, sus facultades se muestran limitadas, puesto que sólo alcanzan a “convocar a ministros de Estado y otros funcionarios del poder ejecutivo, a objeto de que presenten la información requerida sobre proyectos, programas, leyes u otros temas”, fue así como se le ha pedido un informe a la ministra de tierras a mediados de 2007 por avances leves, pero en esta instancia las organizaciones no cuentan con poder de revocatoria. Desde el partido, un integrante de la coordinadora reafirma la importancia de la estructura de coordinación: “Hemos conformado la CONALCAM. Inicialmente creo que es para hacer recomendaciones pero en el corto plazo tiene que constituirse en el sujeto político que dirija este proceso de revolución democrática y cultural”.

Ya no es la central obrera la que de manera ascendente cohesiona los núcleos contestatarios, la era neoliberal se ha establecido gracias a la disolución de una unidad clasista dando por resultado una dispersión de estructuras organizativas, cada una de las cuales guarda rasgos propios. Hay un suelo heterogéneo compuesto por una pluralidad de organizaciones y posiciones. Entonces el cogobierno es pensado al interior de una multiplicidad de instancias que se ligan de manera diferencial con el poder ejecutivo, así como el movimiento indígena se siente plenamente representado por el primer presidente indígena, y en su interior la CSUTCB es parte orgánica del MAS, lo es menos la CONAMAQ aunque participe del pacto de unidad, y a pesar de que el movimiento minero en privado le reconozca a Evo Morales la afinidad con la política pública del área mantiene una independencia de clase que no pocas veces hace valer, y los cooperativistas chocan directamente con el oficialismo, así como también lo hace el tradicionalmente trotskista sindicato de los maestros, participe de una COB hoy reducida en poder, de demandas muy sectorializadas y poco tolerante al discurso que predomina, alejado del clasismo. Este elemento bien propio del carácter pluricultural y multisocietal de la sociedad boliviana, deriva en una serie de especificidades: por un lado, se genera una diversidad de intereses que no pocas veces se

contraponen entre sí, como el litigio que parte de la explotación por parte de los cooperativistas de parajes mineros que en verdad pertenecerían a las comunidades indígenas, por otro lado se tejen lazos dispersos de manera diferencial con cada una de las organizaciones, no es lo mismo el papel de las Bartolinas, creadoras del MAS, que la alianza estratégica más reciente con la FSTMB. De este modo, el poder ejecutivo oficia como una suerte de mediador, y decide en última instancia los vínculos más fuertes a tejer y a quienes dejar de lado. Actualmente no vemos los pliegos petitorios que la COB elevaba como demanda genérica de los sectores populares, más bien se presentan una multiplicidad de demandas particulares de lo más variopintas, mientras una agrupación puede necesitar de manera acuciante tierras, como las ocupaciones que los colonizadores realizaron en el departamento norteño de Beni, otra persigue el aumento de salarios, como es el caso de los maestros de escuela pública. Son condiciones propias de una sociedad abigarrada caracterizada por un patrón de heterogeneidad que demanda una nueva institucionalidad de carácter múltiple, por fuera de los mandos unívocos y piramidales.

3.2 La relación entre dirigentes y núcleos de autoorganización

Véase ahora, en una dimensión central para la problemática del cogobierno, la relación entre las instancias de participación popular y sus dirigentes políticos, en tanto relación que vehiculiza un modo neurálgico de la representación. Como dinámica general, es claro que el poder ejecutivo se encuentra fuertemente dominado por el talante presidencialista que embarga a la actual administración, lo que podría denominarse “evismo” (García Linera, 2006), una interrelación con las agrupaciones que pasa fuertemente por el Ministerio de la Presidencia, y con las cuales Evo Morales se reúne a diario escuchando sus demandas y necesidades. En este sentido, la estructura de decisiones centrales responden a la voluntad del presidente, que en su amplitud máxima hace las veces de *primus inter pares*, atento a las recomendaciones, sugerencias y posiciones de los múltiples actores, pero también teniendo en claro su lugar definitorio. La figura presidencial opera tanto como significante central de la reforma intelectual en marcha -un hermano indígena en el poder- como en su representación de líder carismático, un caudillismo que no adviene del todo bien con la circulación del poder. El jefe de la bancada de diputados del MAS sostiene: “En las decisiones del presidente pesa mucho la presencia de los movimientos sociales, en vez de pensar en la reacción de la derecha él piensa en el sentimiento y en la reacción de los movimientos sociales”.

Al formarse una cúpula transversal se produce una separación en la que no siempre se mantiene un contacto estrecho con las “bases”, donde opera el riesgo de que esa elite se convierta en un estamento en sí, por encima de las trayectorias y pertenencias heterogéneas y plurales que pudiesen presentar. De consolidarse, podríamos presenciar una modificación en la que los núcleos territoriales demandan los recursos que la nueva situación del dirigente pone en sus manos, y bajo esta colocación estructural, en el mejor de los casos el dirigente construye un canal para satisfacer a su espacio de origen, y en el peor actúa motivado por la obtención de algún beneficio personal, o realiza los dos a la vez, como se comenta que sucedió en algún que otro municipio controlado por el MAS. Resuena aquí la apreciación de Zavaleta: “Es correcto decir por tanto que todo dirigente es un mediador hasta que no se convierte en un amotinado” (Zavaleta, 1990:81).

Ahora bien, este bloque no necesariamente va a desentenderse de los requerimientos de sus representados, debido a que el MAS no deja de ser un partido *sui generis*, de directrices ideológicas laxas, debido a que los niveles de institucionalización del gobierno son lo suficientemente tenues como para impedir la total separación funcional de los ahora funcionarios, que siguen ligados orgánicamente a sus lugares primeros, y consiguientemente son esos núcleos autoorganizativos los que aún ejercen funciones de control, como ha sido típico en las matrices sindicales bolivianas. No otra cosa exponía el personal técnico estatal cuando se quejaba de la imposibilidad de firmar la construcción de un puente en la región de Beni porque los dirigentes debían consultar con la población local para que le diesen el visto bueno al acuerdo: “Sus bases les dicen que tienen que ser así y las bases les dicen a sus dirigentes que es así y se va para tal lado”. El punto aquí central es que el grado de autoorganización colectiva hace que los referentes

continúen debiendo responder orgánicamente a las asambleas territoriales, a las reuniones de los comités barriales, a la directiva comunitaria, y de este modo son expresión de los núcleos políticos de base. Debemos afirmar la persistencia de una dinámica asamblearia que se entreteje deliberadamente en la red de movimientos y que forma parte de la acumulación organizativa propia del país andino. Es que la matriz sindical como soporte de la participación colectiva se esparce por doquier, tanto en los sindicatos campesinos, sean coccaleros o de la CSUTCB, como en las memorias organizativas que arraigan en los distritos alteños o en los sindicatos clásicos, es decir, el minero. Un asalariado de Huanuni no sólo referenciaba la palabra democracia en la participación de todos en las asambleas de base, sino que ante la pregunta por el poder de veto de la asamblea general para con un dirigente que no estaba cumpliendo sus funciones dejaba claro que ella tenía “poder de vetar. Decir vos hasta aquí no más, no vengas nunca mas...”. Es que esa dimensión comunitaria y de control, donde aún el ostracismo parece ser la peor condena, se encuentra en Bolivia mucho más cerca de las palabras concretas que de moldes ajenos a la experiencia cotidiana, lo cual nos permite comprender la singular designación de la idea democrática.

3.3 La deriva actual del Instrumento Político

Es bien significativo para la problemática del cogobierno dilucidar la dinámica por la que actualmente transita el Movimiento al Socialismo. Ciertamente, el MAS, al igual que el MIP conducido por Felipe Quispe, se presentó como la “estrategia de poder” de los movimientos sociales (García Linera, 2005). Tras las elecciones, el instrumento político pasa de ser el partido de la oposición al partido de gobierno. Una vez en el Estado no han sido menores los dilemas que se viven en él, si exploramos su tránsito actual nos encontramos con que prevalecen las literales peleas por las *pegas* (puestos de trabajo en el Estado, que tradicionalmente ha sido una de las pocas fuentes de movilidad social), un estadio de deliberación más concentrado y un recorrido que tiende a acercarlo a la dinámica de los partidos tradicionales en busca de su propia reproducción, a veces en ausencia de una intelectualidad orgánica con fines políticos claros. Incluso la estructura política se halla fundamentalmente en las zonas rurales, y sólo lentamente va creciendo en la ciudad, a partir de una lógica nueva. Así, los congresos que se convocaron en estos años se han vistos presos de un faccionalismo marcado, sólo amainado por un sistema relativamente jerárquico dentro de una laxitud que deja pasar fuertes relaciones personales: “Los congresos han sido muchos de amigos y no tantos de militantes. Creo que los militantes en este momento del MAS no deben pasar el 15 por ciento de la totalidad de inscriptos, los demás son amigos”.

Podemos hablar de tres tendencias ideológicas centrales que se expresan en el MAS y ahora en el poder ejecutivo. Una ahonda sus raíces en el movimiento indígena katarista, a la que pertenece buena parte de los dirigentes aymaras, y que pugna por consolidar la revolución democrática y popular; un grupo de llegada reciente que imagina una transición al socialismo pero de muy largo plazo y en los hechos pone énfasis en la necesidad de ampliar y fortalecer la intervención del Estado en la economía. Este grupo se alimenta de militantes de la vieja izquierda estatista y abarca desde marxistas hasta funcionarios nutridos de la corriente nacionalista. Finalmente, una última tendencia bien representada por Evo Morales que partió de las trincheras del sindicalismo y es sensible a las ideas de las organizaciones sociales. Las tres tendencias conviven bajo el paraguas del nacionalismo, pero no son pocos los que ven en el liderazgo de Evo Morales un efecto aglutinador concreto del movimiento, su figura predominante permite ordenar y poner un límite a los posibles disloques que pudiesen deparar los grupos que habitan al instrumento político: “En el MAS hay corrientes políticas pero ellas tienen en el liderazgo de Evo -afirma una senadora- un lugar de encuentro y una barrera que impide que esas corrientes se constituyan en fracturas a su interior”.

Ya en el gobierno no es menor cierto nivel de autonomización del instrumento en su relación con las organizaciones de base, que sin embargo conviven en una tensión que –nuevamente- es difícil que redunde en un grado amplio de separación de las matrices que le dieron origen: “Cuando la dirección del instrumento pareciera crecer demasiado levanta los humos a los

dirigentes del MAS -afirma un dirigente histórico de la CSUTCB-, entonces ya quieren manejarse de manera independiente como si fueran más superiores a las organizaciones cuando no es así. Ellos tienen que estar necesariamente subordinados a las organizaciones porque son dirigentes de ésta, por lealtad, por convicción. El gobierno de Evo es de los Movimientos Sociales al cien por cien”. En efecto, no sólo por una raíz originaria el MAS estará atado a los dirigentes sociales, también por una suerte de *habitus* que ha construido la legitimidad del instrumento político, de hecho una parte sustancial de las organizaciones son el MAS, y aunque tome el complicado discurrir de la partidización, dista de hacerlo como si fuese un partido moderno. Es que los movimientos que constituyeron el instrumento político, que no son pocos, no dudan en afirmar que el gobierno les pertenece, lo cual se manifiesta en que su sector cupular participa del entramado de decisiones, y que reciben los ingresos leves que el Estado antes paupérrimo comienza a obtener; la misma autoridad recién citada comentó: “No necesitamos ningún otro cargo más, ya tenemos presidente...”.

3.4 Las organizaciones sociales ante el nuevo ciclo político

En el nuevo paisaje, la llegada al Estado puede derivar en que los factores de disociación del cogobierno se deban también a que las organizaciones sociales se encuentren privilegiando los intereses más particulares, no exentas de perseguir la ocupación pragmática de espacios de gestión y poder, demandando al Estado la atención de las necesidades por mucho tiempo eclipsadas, en una temporalidad de repliegue económico-corporativo que dista de ser la que se precipitaba en los momentos de movilización: “Lo que noto es que los dirigentes siguen teniendo un discurso político muy fuerte con el Estado pero una propuesta muy sectorializada. Todavía el dirigente no ha asumido el concepto de la visión estatal. Antes los mineros podían pedir el salario pero fundamentalmente defendían la democracia, buscaban la transformación del Estado, tenían una visión estatal de la política”.

Frente a este panorama puede que el gobierno responda bajo mediaciones prebendales, acentuando los tintes piramidales de la construcción típica del poder político, prestando atención en demasía a las necesidades a veces reales de la gestión o la gobernabilidad. Cuando hablamos de “gobernabilidad” mencionemos que el actual presidente declaró ilegal las huelgas sindicales -como la de los maestros y la de médicos-, que voceros de primer orden sostuvieron a mediados de 2007 que la desestabilización del gobierno se debía a la acción concurrente de mineros asalariados, la derecha cruceña y el aumento de la inflación o, finalmente, refirámonos a la comprensiva mirada de Evo Morales para con las administraciones anteriores al ver las pérdidas que sufría la economía nacional a causa de la cantidad de protestas y piquetes de ruta.

Debemos entonces hacer una observación sobre el modo especial en el que hay que considerar las estructuras sindicales locales. Una mirada apresurada que caracterice a la multiplicidad de organizaciones como proclives a desplegar un talante en exceso corporativista, típico de los sindicatos modernos, aun desde una visión embebida de la tradición teórica de izquierda -para ni hablar de los abordajes más típicamente liberales-, puede escapárseles que la matriz sindical no sólo es un pilar de la negociación o de la lucha económica -tal como solía presentarlos Marx- sino que desbordan con mucho esas funciones para dirigirse de pleno tanto a la vida colectiva de la nación como a la dimensión más capilar de las relaciones sociales colectivas. Estamos diciendo que tanto “hacia arriba” como “hacia abajo” la estructura sindical en Bolivia continuamente dio forma a buena parte de las relaciones sociales; son estos los rasgos que permitieron que Linera hablase de una “ciudadanía sindical” (García Linera, 2005) para referirse a los derechos básicos y vitales para la población conquistados por la COB y que Silvia Rivera Cusicanqui, dando cuenta de su capilaridad, señale que en Bolivia “hasta los ladrones están sindicalizados”. Así es como hay que comprender unos ribetes corporativistas siempre proclives a ser articulados por síntesis de orden nacional, por demandas globales, por dimensiones universales de la política y por una imbricación directa con la vida cotidiana, tal es el caso de la superposición de los sindicatos campesinos en la territorialidad de las comunidades indígenas.

Si repasamos lentamente lo visto, no abundan las instancias novedosas de institucionalización de relación con los movimientos, a pesar de un contacto constante, de que las mismas organizaciones poseen un nivel muy fuerte de articulación, aunque existe la voluntad política para que emerjan, lo cierto es que esa forma del cogobierno se encuentra en ciernes. Es un dato significativo que cuando llegó el momento de crear el Ministerio de Aguas prácticamente desde cero se haya replicado el modelo institucional más bien tradicional que contiene viceministerios, programas, líneas de acción, etcétera; aprovechando y naturalizando los ecos de la institucionalidad dispuesta. Aunque una visión más mesurada nos llevaría a comprobar que un *organon* político como la CONALCAM, que viene a concentrar a todas las organizaciones sociales por encima del poder estatal, contiene en sí una práctica en sumo expectante.

4. Cogobernar sin Estado

“El Estado no tuvo, ni en la actualidad ni, sin duda, en el transcurso de su historia, esa unidad, esa individualidad, esa funcionalidad rigurosa, y me atrevería a decir que ni siquiera tuvo esa importancia”. Foucault *Seguridad, territorio, población*.

4.1 Forma Estado, mediaciones hegemónicas y acción instituyente de la sociedad civil

Las diferentes expresiones de cogobierno que jalaron la historia boliviana emergieron de crisis políticas agudas y fueron producto de la acción colectiva desplegada por los sectores populares movilizados: así aconteció con la situación revolucionaria del 52, la crisis hegemónica del 71 y la de Estado que hoy transitamos, aún la instauración de la democracia en el 79 y la posterior tentativa de plasmar el cogobierno fue una conquista de las “masas en noviembre” (Zavaleta, 1987). A lo cual se añade lo siguiente: son ciclos de protagonismo societal que, por encima de la conocida debilidad institucional del país, llevaron a las organizaciones a situarse en múltiples esferas de gobierno. Como ayer, el que Evo Morales ocupe el sillón presidencial es la expresión electoral de la acumulación social del poder político.

Si reparamos en los horizontes de construcción que se emprendían, el socialismo embrionario del 52 se vio preso de una ideología nacional-revolucionaria articulada por el MNR, así como las ansias de cambio radical del 71 opacadas por la dictadura militar, mientras que actualmente los proyectos no apuntan directamente a la creación de una sociedad socialista, su rumbo se enseña en la consigna de una transformación democrática y cultural. Es una diferencia central, ya que el objetivo político estratégico del ciclo contencioso reciente es la consolidación y expansión de los núcleos de democracia directa en un marco de alcance nacional y bajo un gobierno de los movimientos, a la vez que resulta clave la composición y estructuración institucional del tejido multicultural del país; a diferencia de la homogenización nacional-popular perseguida por el gobierno del 52.

Siempre el cogobierno se ha llevado adelante bajo un Estado aun subsumido al patrón colonial y capitalista, dentro de la forma cultural y las instituciones dominantes, el desafío -nos dice Luís Tapia- es crear un cogobierno futuro en relación a las condiciones multisociales y pluriculturales de Bolivia (Tapia, 2006). En Bolivia la *Forma Estado* no es una práctica dominante y articuladora de prácticas menores, a las cuales les confiere un orden, es una práctica más entre otras. Resumiendo, la actual práctica del cogobierno es articulada por un bloque homogéneo de gestión política, que está por encima del instrumento político y de las mediaciones sindicales, aunque provenga de ellas, se presenta organizado de manera escalonada, teniendo a Evo Morales como ejecutor privilegiado. En tanto bloque híbrido y de múltiples pertenencias mantiene niveles de representación, subordinación y es controlado por los núcleos políticos de base, los cuales transitan entre la demanda meramente particular y prescripciones de orden universal. El cogobierno es legítimo ideológicamente, la enunciación estatal se dice como tal, más aun, se dice como

autogobierno, y los movimientos avalan al MAS en tanto figura del cogobierno. No habría que olvidar que las tendencias recorren aquel “óptimo” de la ecuación social entre las determinaciones de la sociedad civil y el Estado, como pensaba René Zavaleta, donde las mediaciones hegemónicas siguen siendo las organizaciones sociales, un movimiento indígena que constituye el gobierno y un heterogéneo entramado societal que aplaza una mayor participación atento a las reivindicaciones centrales cumplidas.

Uno de los núcleos que reenvían al ciclo de la Revolución Nacional es la tendencia a la estatización de los recursos naturales, sobre la cual se proyectan las expectativas de la población y el mayor impulso de la gestión actual. Así como ha terminado en manos del Estado buena parte del proceso de producción hidrocarburífero, hemos visto que la misma voluntad se vuelca sobre el patrimonio hídrico y minero. La primacía de lo económico en la gestión quiere también ser considerada como la base para una apropiación colectiva de la riqueza que modifique integralmente los precarios patrones de la vida material de los bolivianos.

El segundo núcleo a sondear en relación al 52 es la primacía armada del movimiento minero. Si vislumbramos la *ratio* última del Estado, en Bolivia el sector militar supo contener prácticas de fuerte raíz nacional-popular, como durante el gobierno de Torres en el 71, o trabó lazos fuertes con la clase campesina, así ocurrió en el gobierno de facto conservador de Barrientos, que se sustentó en el conocido pacto militar-campesino. Un pacto singular se reedita con el sector militar, al cual Evo Morales legitima y del que espera su apoyo para conservar la “integridad de la nación”. No es casual que un ala castrense de elite que antes se encargaba de erradicar plantaciones de coca y era financiado por EE.UU. en este tiempo se ocupe de tareas directamente ordenadas por la presidencia. El gobierno no posee el peso de las armas como sucedió cuando surgieron las milicias en la Revolución Nacional, pero si una legitimidad electoral, y aunque el dominio neto de la coacción le está vedado lo cierto es que nadie en el último tiempo ha podido hacerse del manejo de lo público a contracorriente de la fuerza erosionante de los movimientos.

La democracia de cuño local fue nutrida por una doble vertiente desde la misma Revolución Nacional: existe un modo de concebir los derechos políticos, la ciudadanía, la democracia, en relación a la autoorganización como núcleo político y al cogobierno como participación, representación y expansión de ese núcleo, pero también otro modo ligado al liberalismo más bien clásico, con un tipo de presencia diferida y dilatada en el tiempo, un sistema eleccionario siempre secundario en la historia del país. Aunque el MNR instaurase el sufragio universal, no es sino en este último tiempo cuando el sistema electoral y el entramado partidario que le es inherente se presentan con un grado de mayor duración y uno no menor de crisis e inestabilidad.

Mencionemos una persistencia bien marcada, el carácter fuertemente participativo que ayer y hoy caracteriza a las organizaciones sociales, que tienen a la dinámica asamblearia como instancia base de la toma de decisiones, por encima de los mecanismos formales de ordenación institucional. Tal como afirma Tapia, si la forma general de la desigualdad política consiste en la separación entre gobernantes y gobernados, el cogobierno supone de por sí la igualdad y la representación, pero es una delegación de un mandato siempre pensado bajo la lógica de la “representación de clase”; esto es, los núcleos políticos constantemente estaban en la responsabilidad de controlar a sus dirigentes y ellos en ser fieles al mandato de la asamblea general, unidos por un mismo cimiento ideológico-político. Estos niveles de deliberación colectiva ya no se asientan sólo en la democracia minera resguardada en los socavones, vienen desde la propia y anterior lógica comunitaria, entremezclada sí con las estructuras sindicales modernas. Es, por lo tanto, *la democracia como autodeterminación de masa* -así la denomina Zavaleta- un hecho singular que atraviesa la época moderna en Bolivia (Tapia, 2006; Zavaleta, 1990).

Los cogobiernos históricos se ligaban a una estructura socioeconómica que a todas luces les era solidaria. El proceso de trabajo minero, que tenía como empleador al Estado, requería niveles de actuación colectiva de los sujetos obreros, dando el soporte para la organización sindical, y a la vez la centralidad minera en la economía nacional vehiculizaba la amplia escala de su intervención. Actualmente, pese a la desestructuración provocada por la era neoliberal, el proceso de individualización natural a las relaciones capitalistas no ha calado en Bolivia, los procesos de

trabajo -aunque variables- continúan desplegándose sobre un sustrato de actuación común, así ocurre con la producción de las comunidades indígenas y pueblos originarios, los coccaleros del Chapare se encuentran en una situación intermedia entre las lógicas comunitarias y el aprovechamiento individual, incluso en los espacios urbanos como el Alto, la empresa familiar sigue siendo el patrón básico de las relaciones económicas. Además, como de algún modo ya hemos mencionado, más allá de lo socio-económico la primera institución de ordenación política ya enseguida es colectiva. Mejor dicho: una de las condiciones más interesantes del cogobierno boliviano es la superposición de lo económico y lo político en un proceso unitario e indiferenciado.

Si tomamos en su generalidad el carácter de las *mediaciones hegemónicas* resulta claro que existe una serie de elementos diferentes: la articulación cobista sobre el campo popular llevada adelante por el combativo y clasista movimiento minero ha dado paso a un archipiélago de movimientos sociales y sindicales de fuerte arraigo territorial, con ritmos, culturas políticas y objetivos no siempre coincidentes, y de fronteras ideológicas más amplias y pragmáticas que conservan referencias nacionalistas revolucionarias al tiempo que incorporan un componente étnico-cultural casi inexistente en la izquierda clásica. En este sentido, es el movimiento indígena el principal sujeto articulador del bloque antagónico, compuesto por una multiplicidad de núcleos políticos de base que impide pensar el cogobierno de modo unidireccional.

El MAS tiene poder de decisión, de balanceo y mediación frente a la heterogeneidad, el gobierno negocia con las organizaciones el ser parte de instancias a las que en principio no pertenecen, e incluso los movimientos pueden recibir su unidad desde el Estado. Es posible que actualmente el MAS, el Gobierno, sea la fuente de articulación de lo nacional-popular en Bolivia, que el gobierno sea la práctica concreta -y el significante concreto- que hace a la existencia de los movimientos sociales como unidad. Además, si en un principio las reivindicaciones centrales fueron producto del ciclo de movilización, hoy se han convertido en “proyecto de gobierno” a partir del monopolio de la ejecución del MAS, que tendencialmente puede controlar el programa de los movimientos. Cuando las demandas se estatizan parecen mantenerse como tales pero borrar sus aristas más radicales, así pasó con la propuesta de Mamani para la nueva empresa de aguas que transitó de asamblea general territorial como mando superior a una empresa con un directorio supervisado por un control social del que aún no se conocen sus funciones. Es decir, de demanda gestada en la movilización a la aplicación de gestión hay cambios sustanciales. En esta línea, la demanda que poseía un camino ascendente no sólo puede ahora realizar el camino inverso sino que constituye un vehículo de relación de Evo Morales con la población de modo directo, la instalación del gas en el Alto también señala esta posible tendencia. Al observar la problemática hídrica que tanto se jugó en el Alto, podremos vislumbrar que el instrumento político está incluso en condiciones de saltar las tradicionales mediaciones de la urbe para encarar de modo directo las necesidades postergadas de la población.

A su vez, la mediación central que realizaba la COB se desarrollaba en relación con un partido político clásico -el MNR-, mientras que actualmente el MAS es un instrumento surgido del seno de las organizaciones sociales, lo cual torna más difusa la frontera entre implantación territorial, organización sindical, movimiento social y partido. El MAS tiene presencia en la sociedad civil, escuchando y absorbiendo sus mandatos culturales y socioeconómicos, elementos que pueden ayudar a sortear el proceso clásico de autonomización y separación de lo social, de centralización del poder en el Estado, y que además se encuentran bien distantes de la red clientelar que predominaba durante los gobiernos neoliberales. De hecho, es claro que el MAS es un producto de la acción instituyente de la sociedad civil.

La Revolución Nacional no tuvo al sistema de partidos como un espacio privilegiado de mediación política, mientras hoy parece consolidarse el privilegio de la instancia eleccionaria como método central de distribución de cargos públicos y lugares políticos. Lo que en verdad prevalece es una superposición no definida sobre el sistema de mediaciones hegemónicas central, ya que se debilita el sistema de partidos, cuya base es la representación diferida, o se potencia el sistema de cogobierno, cuya base es la autoorganización. De mantenerse la impronta actual las

organizaciones sociales deberán subordinarse a los partidos políticos y adaptarse a sus temporalidades. Si a ello se suma el carácter presidencialista de la gestión, el restablecimiento de los pactos partidarios como condición de gobernabilidad tal como sucedió en la democracia procedimental durante la era neoliberal, la satisfacción compartida de un bloque homogéneo de gestión política que pasa a ocupar cupularmente los cargos del Estado en relación con unas organizaciones abocadas a resolver intereses particulares, se podrían acentuar los rasgos prebendales históricamente presentes en los patrones de distribución bolivianos y la política seguiría el destino opaco de la reproducción. En su límite sombrío, “la reforma intelectual y moral” en marcha puede ser eclipsada por prácticas tenues que la tornarían retórica. Es decir, veríamos un gobierno serpentear entre el consenso y el antagonismo, prefiriendo la estructura de mandos del Estado antes que los embriones de nueva institucionalidad que pudiese potenciar.

Efectivamente, nadie duda de que una vez establecido el umbral de pasaje representado por la presidencia de Evo Morales la efervescencia colectiva va naturalmente hacia la baja, como cuestión típica de una muchedumbre electoral que espera la solución concreta de sus problemas materiales más acuciantes, como efecto de un ciclo de actividad propio de los movimientos sociales, pero justamente en Bolivia existe una inteligencia gubernamental que debería ser capaz de crear nuevas demandas, de conducir una pujante formación político-ideológica, de suplir y jalonar con concreción material y transformación política la onda de mayor quietud de los movimientos. Nótese la paradójica claridad de un importante dirigente del instrumento político: “Y nuestros cuadros políticos que han llegado a los municipios no están emponderando políticamente a sus organizaciones sociales, están administrando un modelo municipal neoliberal, entonces ahí también hace falta una conjugación entre la visión política y la capacidad de instrumentar esa visión en la estructura interna de un gobierno municipal. Si nosotros hablamos del empoderamiento en la gestión pública estatal en el micro espacio municipal se tiene que desarrollar eso...”.

El cogobierno naufragaría en el reino de los particularismos o buscaría la configuración de lo universal, tendría su curso entre lo corporativo con sus prolegómenos de negociación y lo ético-político como un proyecto político base de los acuerdos y las articulaciones que surgen desde abajo. En verdad, cuando Gramsci se dedica a pensar las relaciones de fuerza en una sociedad antepone un momento intermedio entre el particularismo y el universalismo, aquel “campo meramente económico”, momento en el que se “plantea la cuestión del Estado, pero sólo en el terreno de lograr una igualdad político jurídica con los grupos dominantes, ya que se reivindica el derecho a participar de la legislación y en la administración y hasta modificarla, de reformarla, pero en los cuadros fundamentales existentes” (Gramsci, 1984:57). Es en el MAS, como instrumento político y, al mismo tiempo, partido de gobierno, donde hay que situar el principal rol y la responsabilidad última que puede acentuar una u otra tendencia, puesto que aparece con el papel dirigente del proceso. Parecería necesario un privilegio de lo político-ideológico, creatividad e innovación frente al pragmatismo que adviene bien con las urgencias coyunturales, un acto de deposición del propio poder ofrecido por las instituciones clásicas.

No habría que olvidar dos características propias del cogobierno que le fueron bien centrales, por un lado ha sabido ser un vehículo de subordinación y control del movimiento minero, allá por el 54 la FSTMB venía a acentuar la potestad sobre sus representantes porque se les hacía que no estaban cumpliendo a las claras los objetivos propuestos por las asambleas de base (Lazarate, 1988). Ocurre que además, y es otra de las características del cogobierno, es el nombre de una dinámica movimientista: compartir el gobierno era el proceso que reflejaba el poder dual que embrionariamente ya contenía las aristas del socialismo que debían establecerse en el futuro cercano. El cogobierno no era una estructura consolidada a la cual llegar sino un movimiento en transición hacia su superación. En 1971, la Asamblea Popular suele afirmarse que careció de la dirección estratégica del partido como así también de las armas que impusiesen la voluntad de crear una sociedad completamente nueva. El riesgo, esta vez, parece venir por la falta de una dirección y un proyecto claro, desde el mismo MAS afirman: “No hemos logrado construir escenarios donde los disensos se constituyan en algunas propuestas para algunos momentos, que

sean parte de una discusión colectiva. Hoy estamos en todos los escenarios públicos. Nos hacen falta cuestiones más fuertes de propuesta y de discusión”. Hay que considerar que es posible que el horizonte del gobierno no sea tan vasto como el que anunciaba el ciclo político que concluye en 2005, quizás se trata de un acuerdo en el que -así lo presenta el vicepresidente- “los grupos de poder desplazados reconozcan la nueva hegemonía indígena-popular y los indígenas mantengan ciertos privilegios a los primeros”.

Tenemos entonces un cuadro de geometría variable en la que existe un grado muy amplio de co-responsabilidad. Para que el cogobierno tenga existencia requiere de grados de movilización asambleario, de dirigentes comprometidos con ella, y de una elite dirigente dispuesta a potenciar la autoorganización de los núcleos políticos, además de una sintonía ideológico-política y de intentos colectivos de crear nuevos espacios no antes vistos. Tal como lo planteaba Zavaleta: “Un pueblo que debe recibir la unidad del Estado es un pueblo que no ha sido capaz de sí mismo”, y la ausencia de innovación es reemplazada por las prácticas ya disponibles, pero en realidad -dado lo tajante de la afirmación- lo cierto es que el boliviano es uno de los únicos pueblos que puede prometer no esperar del Estado lo que puede tomar por sí mismo.

4.2 De la administración del Estado al cogobierno político

El esquema fijo recién presentado se retroalimenta bajo el supuesto de que el proceso político boliviano se encuentra preso de sus tendencias menos felices, lo cual no sólo es falso sino que sería reduccionista. Debemos sopesar una ambivalencia que está inscrita en lo real, la condición de líder cada vez más carismático de Evo Morales y la existencia de un instrumento político completamente orgánico puede ser una muestra de los múltiples elementos estructuralmente bifrontes de la realidad boliviana, tensiones que también se podría encontrar en el proyecto concreto de gobierno; contando que la experiencia en marcha tiene el vacío de lo que está por inventarse, puesto que no nos beneficiamos con un pasado análogo a replicar o a impugnar de lleno.

Afirmemos entonces que sigue siendo la acción política de los núcleos autoorganizativos lo que fuerza una mayor ampliación de espacios autogestivos e incluso de la aplicación de políticas progresistas. Ha sido la movilización del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni la que sostuvo todo el proceso que comienza en la resistencia a la capitalización, pasa por la estatización y culmina con la búsqueda de mayores niveles de control obrero. Estos hechos nos muestran la importancia de mantener activo el sistema de demandas y movilización propio de las organizaciones, pero hay que considerar que el reciente conflicto en Huanuni de julio de 2007 podría haberse evitado en la opinión tardía de los mismos que lo desencadenaron, dada la afinidad electiva que les otorga un proyecto común a los asalariados mineros y la gestión estatal, lo que reenvía tanto al carácter inestable como a la necesidad concreta de construir nuevas figuras de articulación política invocadas por los hechos. El resultado no ha dejado de ser favorable, las experiencias de autogestión, de control social que se afiancen en Huanuni se prevén como un modelo para pensar la Ley de Empresas Estatales. Si un país tan movilizado e institucionalizado desde abajo no acierta a crear mecanismos de democracia real, lo más posible es que se vea desbordado continuamente por los repertorios tradicionales de acción colectiva; de hecho, el número de protestas no ha mermado considerablemente. Es precisamente este nivel de confrontación el que se hace patente al considerar la amenaza de la Coordinadora del Agua y la Vida de ocupar de buenas a primeras el Ministerio de Aguas, arrogándose una legitimidad para tal empresa que en lo más mínimo se cuestiona a sí misma. El cogobierno no sólo es reclamado por los hechos evitables, también los hechos coloreados de irrupción lo reclaman.

Sólo con escudriñar los ministerios visitados podemos ver que ha llegado al Estado una nueva elite política que pugna por modificar los patrones ideológicos que hasta hoy prevalecieron, dándole curso a un nuevo marco legal-nacional. Hay dos elementos que se encuentran avanzando fuertemente, uno de ellos es una mayor ampliación de derechos, sobre todo en relación con un grado amplio de codificación de nuevas pautas que vienen a desterrar las leyes de inspiración neoliberal que se instalaron en cuanto campo legislativo le fue posible. Esta modificación es la

sedimentación en el código legal de una reforma intelectual y moral que viene a modificar la totalidad del sistema ideológico boliviano, trastrocamiento centrado en la reivindicación de los derechos indígenas, en la igualdad cultural frente a una sociedad tradicionalmente marcada por el racismo y la segregación étnica. De igual modo, están presentes los intentos ministeriales por generar procesos de mayor participación, aunque no acierten a encontrar un cause claro, lo cierto es que en estas áreas las organizaciones sociales continúan siendo sujetos de primer orden a la hora de tornar posible un desarrollo legítimo. La victoria del MAS ha sido apabullante en las urnas, y no habría por qué pensar que de buenas a primeras una elite política iría a abandonar un campo sobre el cual ha obtenido y podrá obtener tan buenos resultados. El problema real no consiste en la negación de la instancia electoral, sino en el modo en que se entrecruza con las formas de democracia directa y cogobierno.

El mandato de Evo continúa siendo fiel al elemento articulador de los movimientos sociales que vino a reemplazar a la articulación cobista, la “agenda de octubre” resumida en nacionalización y Asamblea Constituyente -en un rumbo en el que adviene el futuro electoral-. Ambos elementos prosiguen su marcha y de este modo el instrumento político puede legitimarse y relacionarse de manera directa con una población que finalmente ve el intento de llevar adelante la consigna de *suma kamaña* (vivir bien) como dignidad primera de todos los bolivianos. Es desde el poder nacional que una oleada neodesarrollista apunta a otorgarle un papel central al Estado en la economía, elemento que se plasmó en la fundación de EPSAS y la nacionalización del cerro Posokoni. Notemos que el Ministerio de Aguas se maneja con un presupuesto cercano a cero, lo que convierte al proceso de estatización de los recursos en un impulso completamente necesario para comenzar a sostener un nivel de autonomía económica.

Hacíamos referencia a la capacidad de innovar políticamente de las organizaciones durante el último ciclo político -el “ocaso de un ciclo estatal”, al decir de García Linera (García Linera, 2002)-, es esa vitalidad a la vez constituyente y destituyente la que debe entroncarse con una de las dimensiones de acumulación que aparecen como singulares del país, la capacidad autoorganizativa. La reforma intelectual y moral en marcha es también el derecho al cogobierno, la articulación de las instancias macro y micro de decisión colectiva por encima de la lógica electoral; de modo que sea la democracia en tanto autoorganización la que se replica incansablemente. El MAS, estructura central de mediación, puede privilegiar la voluntad política existente de potenciar la acción instituyente de la sociedad civil, lo cual implica la paradójica pretensión de consolidarse como instrumento político y perder peso como partido gestión; o, en palabras de Gramsci, de sostener su carácter orgánico en tanto “continua adecuación de la organización al movimiento real”, o sea: el cogobierno político.

4.3 La relaciones de fuerzas: entre el antagonismo regional y el consenso táctico

En aquellos dos puntos neurálgicos donde se dirimen las relaciones de fuerzas centrales, el MAS ha tendido a ceder terreno frente a las empresas multinacionales y al bloque político que, desde su dispersión profunda luego de las elecciones de 2005, ha sido ampliamente rearticulado por la elite económico-política de Santa Cruz. La nacionalización dista de poseer un talante en sumo radical, lo que no quita que no haya aumentado las ganancias para el Estado, ahora más pertrechado económicamente como para sostener una política neodesarrollista, o para sentar las condiciones para una mayor ampliación de los derechos económicos y sociales de la población. Hay que mostrar otra de las ambivalencias que recorre a la actual gestión de Evo Morales, los dividendos finales por la nacionalización de los hidrocarburos están lejos de representar el 82 por ciento de regalías tal como en un principio fue anunciado, en todo caso se encuentran mucho más cerca del 52 propuesto incluso en la anterior presidencia de García Mesa, así como la nacionalización se parece más a una estatización de una parte del proceso productivo -la extracción- que a una expropiación. Igualmente, es indudable que representa un aumento sustancial para las arcas del Estado y que en el fondo ha trastocado la balanza a todas luces escandalosa que regulaba los anteriores intercambios comerciales del área hidrocarburífera, y así ha sido considerado por la población.

Lejos de apostar por el antagonismo que motivó gran parte del proceso político boliviano, el partido dirigente parece ceder en las demandas neurálgicas que plantea la oposición. En este nivel hay que subrayar la eficacia de la oposición para articular un discurso que combina independencia política y soberanía económica, y claramente se ha apropiado de la demanda de autonomía que en un principio era privativa de las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Pero esa capacidad, amplificadas por los medios privados de comunicación, no llega a ser un proyecto de país y la “oligarquía cruceña” avaló una parte significativa de las propuestas que sostuvo el MAS, como la nacionalización, a falta de un consenso propio. Lo que sí resulta novedoso es su posibilidad de movilizarse en sus lugares, la marcha que se realizó en Santa Cruz el mes de diciembre de 2006 a favor de su autonomía política convocó a una multitud, expresando el carácter “popular” de la demanda, del cual Evo Morales tomó nota. Últimamente las pasiones regionalistas se han acentuado, la demanda de autonomía se entrelazó con las prerrogativas políticas que reclama Sucre como capital histórica o con las pretensiones de mayor porcentaje de regalías exigida por Tarija, ansias apuntaladas por la presidencia de Carlos Mesa que decretó la elección local de los prefectos (aunque luego debiesen ser refrendados por el presidente, en los hechos su legitimidad ahora proviene de los votos).

La central distribución de tierras en el oriente, que no marcha a pasos tan lentos, viene a responder a un plan que le antecede un diagnóstico sobre la imposibilidad de dar cuenta de un proceso de mayor expansión hegemónica sin que conduzca a escenario de crisis lo suficientemente aguda como para no dar pauta de su posible desenlace, y entonces se trataría de sentar las bases de una instalación socioeconómica en el terreno que hoy no le es propio al bloque de poder popular. La acción territorial es una característica clave de las organizaciones sociales bolivianas, y algunas de ellas pasan desde el ámbito local al nacional con relativa facilidad, no hace mucho tiempo que el movimiento indígena del oriente se ha unificado, produciendo estructuras de agregación que se espera consoliden una diferencia con el patrón de la oligarquía local. En los cinco años de reforma agraria que impuso la Revolución Nacional ha habido una titulación de 10 millones de hectáreas, mientras que en un año de gobierno del MAS se titularon 5 millones de hectáreas. El desafío es económico, lograr que posean un mercado interno y eventualmente uno externo, y que se conviertan en predios realmente productivos, puesto que en los años 50 la distribución no vino acompañada de una modernización del agro; pero el desafío también es político a causa de que el poder económico de la elite cruceña es la tenencia masiva de tierra. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz está siendo procesado por la posesión ilegal de 26 mil hectáreas, y casi todos sus dirigentes están vinculados a la actividad agrícola o a la actividad pecuaria. Paralelamente, el conflicto regional también se expresa en las formas mediante las cuales el gobierno busca intervenir sobre el poder de los prefectos y de los comités cívicos.

A principios de 2007, Evo Morales se dedicó a distribuir personalmente a los municipios una abultada cantidad de dinero –30 millones de dólares– que la chequera generosa de su par venezolano le había habilitado sin contraprestación cercana. Y, últimamente, el MAS busca enfrentar a los municipios con las prefecturas, a partir de los dilemas con respecto a la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que no serán otorgados a aquellos que no presentaron el Programa Operativo Anual; buscan así que los municipios entren en colisión con las prefecturas. Tenemos un enfrentamiento territorial de baja intensidad, y no se agudiza porque las fuerzas en disputa bien o mal se desplazan, se canalizan vía la Asamblea Constituyente. Seguramente un punto de quiebre importante, hito que viene a datar una periodización, lo constituye la aprobación solitaria de la nueva Constitución en un cuartel de la ciudad de Sucre desbordados por la manifestaciones callejeras circundantes. La presidenta de la Asamblea, la campesina quechua Silvia Lazarte, anunció el 24 de noviembre de 2007 la aprobación de la Carta Magna en primer debate por 136 de los 138 constituyentes presentes -de los 255 elegidos en julio de 2006-, a tan sólo tres semanas de que venciese la prórroga fijada en agosto para entregar la Constitución. La oposición y algunos líderes regionales rechazaron de inmediato el texto constitucional y argumentaron que se ignoró a medio país y fue aprobado “bajo fusiles” y con “sangre en las calles”.

Este antagonismo sumergido se combina con la apuesta más sólida por una disposición consensualista. En definitiva, aún permanecemos en la situación de un empate hegemónico, fricciones desplazándose por lo bajo, a la espera de otro resquicio por el cual salir a la luz. Así y todo, tal tentativa no dejará de encontrar el protagonismo de los núcleos de autoorganización colectiva que guardan un grado de densidad constante y que se expresaron con fuerza en el 52, y después en la Asamblea Popular del 71, y luego hoy día, es decir, un entramado societal sobre el que se imprime uno político que nada indica que vaya en menguar en la región ubicada en el medio de Latinoamérica. Si de este análisis, que se quisiera apegado a los hechos concretos, pudiese desprenderse un balance donde las sombras superan a la luces, es porque presta demasiada atención a los hechos coyunturales. Pero poca duda cabe que Bolivia es hoy el país donde todos los ámbitos de deliberación nombrados apenas tienen equiparación en el continente, por eso se le exige al país andino lo que va a seguir pudiendo dar, una clave para pensar la política emancipatoria de los nuevos movimientos sociales más allá del Estado, más acá de la hipérbola autonomista, y en relación con instancias macro de democracia colectiva; elementos presentes en la actual idea de cogobierno en Bolivia.

Bibliografía

- Ayo, Diego 2004 *El control social en Bolivia* (Bolivia: logolink).
- Barrett, Patrick; Rodríguez Garavito, César y Chavez, Daniel 2007 *La nueva izquierda en América Latina*. (Colombia: Norma).
- Cajías Magdalena 2007 “La crisis de la minería del estaño y sus consecuencias en Huanuni” (Bolivia: mimeo).
- García Linera, Álvaro 2001 *La condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la minería mediana (1950-1999)* (Bolivia: Muela del Diablo Editores).
- García Linera, Álvaro 2002 “El ocaso de un ciclo estatal” en AAVV *Democratizaciones plebeyas* (La Paz: La Muela del Diablo Editores).
- García Linera, Álvaro 2004 “La crisis del Estado y las sublevaciones indígena-plebeyas” en AAVV *Memorias de Octubre* (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- García Linera, Álvaro 2005 “La lucha por el poder en Bolivia” en AAVV *Horizontes y límites del Estado y el poder* (La Paz: Muela del Diablo Editores).
- García Linera, Álvaro 2006 “El evismo: Lo nacional-popular en acción” en Revista *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año VII N° 19.
- Giansante, Consuelo, Babiano Luís y Bakker Karen 2007 “La mercantilización del agua” en *Después de las guerras del agua* (Bolivia: Plural).
- Gramsci, Antonio 1984 *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno* (Buenos Aires: Nueva visión).
- Lazarte, Jorge 1988 *Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. Historia de la COB, 1952-1987* (La Paz: ILDIS).
- Mokrani, Dunia 2006 “Pensar la política en Bolivia desde Huanuni” en *Pensamiento de los confines* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica) N° 19.
- Mondaca, Gonzalo 2006 “Control y participación social en la gestión de servicios públicos de agua y saneamiento” en *Todo sobre el agua* (Comisión para la gestión integral del agua en Bolivia) (Bolivia) Boletín N° 78.
- Soliz Rada, Andrés 2005 *La fortuna del expresidente* (Bolivia: Edición del autor).
- Stefanoni, Pablo y Do Alto, Hervé 2006 *La revolución de Evo Morales* (Argentina: Capital Intelectual).
- Svampa, Maristella 2007 “Notas provisionales sobre la sociología, el saber académico y el compromiso intelectual” (Buenos Aires: mimeo).
- Tapia, Luís 2002 *La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad* (La Paz: Muela del Diablo Editores/CIDES-UMSA).
- Tapia, Luís 2006 *La igualdad es cogobierno* (Bolivia: mimeo).

Wallerstein, Immanuel; Hopkins, Terence; Arrighi, Giovanni. 1999 *Movimientos antisistémicos* (España: Akal).

Zavaleta Mercado, René 1987 (1983) “Las masas en noviembre” en Zavaleta (comp.) *Bolivia hoy* (México: Siglo XXI).

Zavaleta Mercado, René 1987 (1974) *El poder dual* (Cochabamba: Los Amigos del Libro).

Zavaleta Mercado, René 1990 *El Estado en América Latina* (Cochabamba: Los Amigos del Libro).